



Universidad de Alcalá

**DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE: SISTEMA DE
PROTECCIÓN EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LAS
NACIONES UNIDAS**

M.^a ISABEL GARRIDO GÓMEZ
Catedrática de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Alcalá

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO AMBIENTAL

1. Evolución histórica de los derechos humanos
2. Consideraciones sobre el derecho al medio ambiente
 - 2.1. Qué es el medio ambiente
 - 2.2. Qué se entiende por derecho a un medio ambiente sano y adecuado

CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL SISTEMA EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

1. Instrumentos de protección del medio ambiente
2. Sistema Europeo
 - 2.1. La protección del ambiente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: *Caso Arrondelle contra Reino Unido* y *Caso Guerra contra Italia*
 - 2.2. La violación del derecho a la vida como posible consecuencia de una grave contaminación ambiental
3. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

CAPÍTULO III

ANALISIS DEL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

1. El Derecho internacional al ambiente tras la creación de las Naciones Unidas
2. Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano y el Informe Brundtland
3. La Declaración de Río de Janeiro y el *World Summit on Sustainable Development* de Johannesburg

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de esta investigación es poner de relieve las indicaciones internacionales (normas, jurisprudencia, conducta de los Estados hegemónicos y de las principales organizaciones internacionales) que sirven para disipar las dudas sobre parte de la doctrina relativa a la configuración independiente de una norma de Derecho internacional general que establece una obligación *erga omnes* de proteger el medio ambiente, entendida en un sentido unitario y no sectorial como patrimonio común de la humanidad.

La enucleación de esta norma ha sentado, por tanto, las bases para cuestionar la existencia, a nivel europeo, como se ha señalado, de un derecho individual al medio ambiente internacional, funcional precisamente a la protección del bien jurídico ‘medio ambiente’ en el sentido antes expuesto. Esta evaluación parecía especialmente actual, especialmente a la luz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, de la plena eficacia jurídica reconocida por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del vínculo orgánico establecido por ella entre las normas de protección de los derechos humanos previstas por la legislación de la UE y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

A nivel organizacional, la investigación comenzó con un panorama histórico de los orígenes del derecho ambiental internacional, seguido de un análisis de la legislación principal y de la práctica internacional pertinente, seguido de un estudio de las fuentes del mismo campo de experiencia jurídica. De este modo, el análisis ha puesto de manifiesto un crecimiento exponencial, en un espacio de tiempo relativamente corto, de los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales, cada vez más extensos e incisivos, así como la formación progresiva de normas que respondan a las exigencias de la costumbre.

Los graves problemas generados por el desarrollo masivo de la sociedad industrial, desde las múltiples formas de contaminación hasta el agotamiento de los recursos naturales, han situado desde hace tiempo la protección del medio ambiente en el centro de los intereses de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, la noción relativa, que en el pasado tenía una connotación predominantemente científica y naturalista, ha empezado a tener cada vez más importancia en las ciencias sociales, especialmente en la dimensión jurídica correlacionada con las intervenciones normativas, en sentido amplio, en el ámbito interno de los Estados y en el ámbito internacional, concernientes, precisamente, a los requisitos de protección preventiva y represiva.

En un principio, estas intervenciones sólo eran fragmentarias y sectoriales, es decir, estaban relacionadas con la protección de intereses o bienes específicos, como el paisaje, el aire y el agua y el uso del suelo. Pero luego han ido asumiendo, cada vez más, en el ámbito internacional, un alcance más amplio, que corresponde a una concepción unitaria del medio ambiente, entendida como síntesis de los factores que permiten y estimulan la vida de los seres vivos, que garantizan, al mismo tiempo, una vida sana, el bienestar humano individual y colectivo y un desarrollo sostenible, de manera que se preserve el medio ambiente también con respecto a las generaciones futuras.

En particular, se ha reconocido la estrecha correlación entre los diversos intereses a nivel objetivo, que en su conjunto convergen en el único bien complejo que califica como medio ambiente y, a nivel subjetivo, el carácter colectivo de estos intereses, que implican la participación de una pluralidad de Estados y a menudo tienen un carácter planetario. El medio ambiente, en este sentido, es un valor fundamental de la comunidad internacional, cuya protección redunda en interés de todos y cada uno de los Estados, al igual que las demás necesidades primarias de toda la humanidad. Además, sólo la acción sinérgica de los exponentes de la comunidad internacional puede satisfacer las expectativas de bienestar y calidad de vida relacionadas con la protección del medio ambiente, que, por lo tanto, ha asumido las dimensiones de una función social del orden internacional, confiada principalmente a los Estados, pero también a las organizaciones regionales, gubernamentales y no gubernamentales, y a los órganos de las Naciones Unidas, que actúan como coagentes de la comunidad mundial.

El desafío de la protección universal del medio ambiente es también emblemático de los profundos cambios en la estructura del orden internacional, que, con sus características cada vez más claras, muestra, por una parte, una progresiva erosión de los espacios tradicionales de soberanía estatal y, por otra, una creciente e incisiva importancia de los nuevos actores del Derecho internacional. Y es precisamente el papel decisivo para la protección del medio ambiente desempeñado por los individuos y las asociaciones ecologistas el que ha sido un punto de vista privilegiado de la investigación, cuyo principal objetivo científico es analizar e ilustrar los procesos normativos y jurisprudenciales que han llevado a la emergencia del derecho individual a un medio ambiente sano como una posición jurídica subjetiva independiente dentro de los derechos fundamentales de la Unión Europea y del sistema del CEDH.

En el ámbito europeo, se han sentado las bases para cuestionar la existencia de un derecho individual a un ambiente sano a nivel internacional, que serviría precisamente para proteger el bien jurídico ‘medio ambiente’. La doctrina se ha dedicado a delinear los contornos de la ley el medio ambiente sano como una posición jurídica protegida, aunque indirectamente, por el CEDH. Por otra

parte, el perfil de la configuración del derecho al medio ambiente en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que es uno de los derechos fundamentales protegidos por la citada Carta, no se profundiza especialmente, al igual que otros derechos similares de carácter programático, en primer lugar, el derecho a la salud, que, a diferencia del derecho al medio ambiente, está sancionado positivamente por el artículo 35 de la Carta. Puede considerarse que la protección del medio ambiente, al igual que la protección de la salud, no es sólo un objetivo que debe integrarse en las políticas de la UE, sino también un derecho subjetivo autónomo protegido por medios de protección preventivos y represivos adecuados, tanto internos como externos a la UE, que también confirman la existencia de un sistema multinivel de ‘aplicación integrada’ para proteger los valores compartidos en la sociedad global.

Ha habido un crecimiento exponencial en el número de acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales que son cada vez más extensos e incisivos, así como en la formación progresiva de normas con los requisitos de la costumbre. En particular, podemos reconocer las características de las normas primarias del sistema jurídico internacional en la previsión de la responsabilidad de los Estados que han causado un evento perjudicial para el medio ambiente, sobre la base del principio de “quien contamina paga”; en la obligación de prevención -que se suma a la de reparación- por la que los Estados están obligados a adoptar un comportamiento virtuoso, orientado a prevenir el daño ambiental; las obligaciones de información, consulta y negociación que incumben a los Estados responsables de los daños ambientales (esa norma, cuya existencia ya se había invocado en relación con el accidente nuclear de Chernóbil, figura también en los Principios 18 y 19 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de junio de 1992). Del mismo modo, la “obligación de proteger y preservar el medio ambiente marino” consagrada en el artículo 192 de la Convención de Montego Bay de 1982 se considera ahora de carácter consuetudinario.

El Tribunal de Estrasburgo hizo que la protección del medio ambiente entrase entre las posiciones jurídicas subjetivas protegidas por algunos derechos fundamentales consagrados en el CEDH, hasta el punto de consagrar en una sentencia la existencia de un derecho humano específico a un medio ambiente sano, que contribuya también a esbozar su contenido sustancial y de procedimiento. Esta orientación jurisprudencial tiene, en particular, el efecto positivo de añadir, de hecho, el derecho al medio ambiente al catálogo de derechos humanos protegidos por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, permitiendo así que las personas que, individual o colectivamente, se consideren perjudicadas por la conducta de Estados negligentes en materia de medio ambiente, puedan servirse de los recursos previstos para la protección de los derechos humanos en el sistema de dicho Convenio.

Un análisis de las numerosas disposiciones del Tratado de la Unión Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales, que establecen una estrecha relación entre los derechos fundamentales garantizados por el derecho de la UE y los establecidos en el CEDH, interpretados a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muestra también que el derecho al medio ambiente existe a nivel europeo y que se sitúa al lado de los derechos fundamentales tradicionales, en virtud de los cuales cada componente de la raza humana está investido de la propiedad de una posición jurídica autónoma, que aúna situaciones subjetivas y diferentes poderes otorgados para garantizar la conservación a largo plazo de los recursos naturales, en interés de las generaciones presentes y futuras.

En el ámbito del marco sistemático, se debate si este derecho se remonta al esquema clásico de los derechos de la persona, o si se trata de una fórmula sintética para indicar una serie de situaciones subjetivas, estructuradas y protegidas de manera diferente, relativas a bienes que no lo son en el sentido económico.

CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO AMBIENTAL

1. Evolución histórica de los derechos humanos

Para entender la correlación entre Derecho internacional y derechos humanos y como estos nacieron, es oportuno proceder a un examen histórico que pueda ayudar a aclarar como hemos llegado al día de hoy a la creación de un catálogo de derechos humanos abierto y en continua evolución.

En la concepción romana, y antes en la aristotélica, el derecho es una proporción, una distribución de bienes entre los que componen la sociedad civil: el derecho, por lo tanto, expresa el sentimiento del hombre de sentirse parte de una comunidad y ya no es voluntad de un soberano sino del '*dicere*' de un juez¹. Por lo tanto, el ordenamiento existe cuando el juez se pone como '*tertius*' en una disputa dictando cual es, en aquel caso en particular, la norma que se aplica. De hecho, se trata de un enfoque empírico: caso por caso, los juristas adaptaban las costumbres antiguas a los nuevos problemas y así las decisiones de los tribunales se convertían en fuentes del derecho. Solo más tarde empieza a ser parte de la experiencia jurídica romana la noción de sistema jurídico, tras el dominio del Mediterráneo, cuando para regular las relaciones entre no ciudadanos se da origen al *ius Gentium*, producto por el reconocimiento jurídico de reglas de conductas no reconducibles a las costumbres de las *polis*, sino a principios más indeterminados y conectados a la ética: *equitas* y *bona fides*².

En el iusnaturalismo moderno esta visión empírica del derecho es invertida, cuando se habla de *ius Gentium* para definir el Derecho internacional se expresan las fuerzas iusnaturalistas y sus tendencias a ponerse como reglas no solo de la conducta de los Estados sino, también, de la conducta de los individuos³.

La perspectiva iusnaturalista de los *ius Gentium* expresa la idea de un único orden jurídico que domina las relaciones individuales y también las internacionales, dándoles los mismos

¹ VILLEY, M., *Le droit et les droits de l'homme*, Presses Universitaires De France - PUF, Paris, 2014, p. 52.

² BENEVISTE, E., *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, vol. II, Einaudi, Torino, 1976, p. 369.

³ Teoría de la Escuela Sociológica, entre los exponentes mayores Scelle.

fundamentos de ley natural y reglas análogas, haciendo originar la exigencia de una unidad jurídica e institucional encima de los Estados.⁴

Los derechos y las libertades naturales reconocidos a los individuos se fundan en la natura humana o en la natura de las cosas y la justicia, por lo tanto, se encuentra colocada en un mundo ideal separado del real. Ahora bien, para entender cómo y cuándo se originó una concepción de derechos humanos más contemporánea parece oportuno destacar la posición de Bobbio que sostiene fuertemente que sólo un sistema jurídico que está encima de los Estados pueda garantizar el respeto de los derechos de los individuos. Hoy en día nos enfrentamos a muchas problemáticas contra las que el mundo contemporáneo tiene que luchar y sobre las cuales el Derecho internacional tiene que expresarse más a menudo y se advierte la exigencia de recurrir a formas de reglamentación de las conductas que no obedezcan a la lógica sino a la ética⁵.

El pensamiento jurídico entonces se traduce en la capacidad de reconducir las normas jurídicas a los principios generales para que se cree un diálogo entre el precepto jurídico y el mundo de los valores. Entonces los valores que constituyen los principios del Derecho internacional de los derechos humanos son los del respeto de la dignidad del individuo, de paz y de democratización internacional⁶.

El tema de los derechos humanos está estrechamente conectado a los conceptos de democracia y de paz. En virtud de esto, los elementos esenciales para que en una sociedad se puedan tutelar los derechos humanos están recopilados en los binomios democracia/libertad y paz/ausencia de guerra⁷. En efecto, mientras la *ratio* y la finalidad de las primeras Constituciones democráticas modernas y de las Declaraciones de derechos humanos reconocen y tutelan los derechos humanos, la paz es la *condicio sine qua non* de la efectiva protección de dichos derechos en los Estados.

Según Bobbio, la única manera de alcanzar la *tranquillitas universalis*, es decir, la paz/ausencia de guerra, es la democratización del sistema internacional, llegando a un reconocimiento y a una tutela *erga omnes* de los derechos humanos. Al mismo tiempo afirma que la ciudadanía es el presupuesto necesario para ser titulares de los derechos, ya que, el Estado la reconoce a los individuos como ciudadanos y titulares de situaciones jurídicas subjetivas. En consecuencia, Bobbio concluye

⁴ KANT, I., “*Per la pace perpetua*”, trad. de R. Bordiga, Feltrinelli Editore, Milano, 2004: “il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell'ospitalità universale. Il diritto cosmopolitico è quello di cui sono soggetti gli uomini e gli stati, quali cittadini di uno Stato umano universale”.

⁵ DE STEFANO, P., *Il Diritto Internazionale dei diritti umani*, Editoriale Scientifica, Padova, 2012, p. 62.

⁶ *Ibidem*, p. 62.

⁷ BOBBIO, N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, pp. 17-44.

admitiendo qué si los derechos humanos existen, solo existen en el Estado soberano que tiene que positivarlos y garantizar una efectiva tutela de estos⁸.

Los derechos humanos necesitan que el sistema jurídico internacional evolucione para que sea reconocida la subjetividad internacional a los individuos. De hecho, desde un punto de vista histórico, se puede observar que la afirmación de los derechos humanos nace en la edad moderna, con la formación de las entidades estatales y resulta ser el producto de una relación nueva entre Estados y ciudadanos, no mas súbditos, es decir, ahora se resaltan como prioridades los derechos de los ciudadanos y no los deberes de los súbditos. Así, cambia la perspectiva desde la cual se mira a la relación política Estados/ciudadanos: no desde el punto de vista de los poderes del Soberano, sino desde el de los derechos de los ciudadanos, afirmándose una concepción individualista en contraposición a la concepción tradicional organicista. Cabe evidenciar que una perspectiva individualista valoriza la diferenciación de los intereses y anula el individuo en una sociedad que prevalece sobre los individuos.

Con la doctrina iusnaturalista/racionalista se afirmó el derecho a no ser oprimido, gozando el individuo de alguna libertad fundamental. Estas libertades son naturales ya que pertenecen al hombre como tal y no dependen de la voluntad del Soberano.⁹ La concepción individualista de la sociedad empezó a transformarse al reconocer los derechos de los ciudadanos de un solo Estado a reconocer los derechos de los ciudadanos en el mundo.

Finalmente, se produjo una evolución desde el derecho interno de los Estados al Derecho internacional cosmopolita, a través de la estipulación de numerosos acuerdos internacionales entre Estados y a la creación de normas imperativas de Derecho internacional general y consuetudinario. El mayor ejemplo es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 1948, que hizo emerger al individuo en el plan internacional, un plan que hasta este momento había sido reservado solo a los Estados, en virtud de la concepción Estado-céntrica. Desde un punto de vista teórico se puede considerar que los derechos humanos sean derechos históricos, es decir, originados en circunstancias marcadas por la lucha por la defensa de nuevas libertades contra los antiguos poderes. Bobbio opera una clasificación cronológica de los derechos que nacen en épocas distintas: se pueden individuar cuatro generaciones de derechos, productos históricos, originados desde necesidades del tiempo en el que se encuentra¹⁰.

⁸ *Ibidem*, pp. 17-44.

⁹ *Ibidem*, pp. 17-44.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 17-44.

La primera generación, es decir, la que comprende los derechos civiles y políticos, nace en la edad moderna por las luchas contra el Estado absoluto. Se reconocen libertades individuales, liberales y iluministas reclamadas por la burguesía, proclamadas con las revoluciones americana y francesa. Las libertades de la primera generación se definen como negativas, ósea, libertades del Estado, y constituyen el punto central del pensamiento liberal. En un Estado liberal el ciudadano es librado de sus vínculos de súbditos que tenía antes y puede desarrollar su actividad sin injerencia de los poderes públicos. El individuo es libre y el Estado no puede regular su vida.

En la segunda generación de derechos encontramos los derechos económicos, sociales y culturales, nacidos en la segunda mitad del siglo XIX con el aumento de las reivindicaciones de la clase proletaria que pedía la intervención del Estado o, más bien, *Welfare State*. Los derechos de la segunda generación son las libertades sociales, o libertades positivas. El paso definitivo del Estado liberal al Estado social se debió sobretudo a la positivización de algunos derechos sociales y a la equiparación del principio de igualdad sustancial al principio de igualdad formal. En un Estado social no sólo se reconocen algunas libertades, sino la garantía de su efectiva protección. Por esto, se requiere la intervención del Estado para asegurar el real ejercicio de los derechos sociales y la participación positiva de los ciudadanos a la vida política, económica y cultural del Estado. De esta manera, el Estado tiene que promover los beneficios de los ciudadanos y erigir las condiciones, o remover los obstáculos, para que el ciudadano puede ser titular efectivo de los derechos.

La tercera generación de derechos incluye los derechos sociales e individuales comunes a los grupos humanos y a los ciudadanos del mundo y no a los solos individuos como ciudadanos de un Estado. Se trata de una categoría de derechos heterogénea que contiene el derecho al desarrollo, a la paz internacional, a un medio ambiente sano y salubre, a la comunicación, a la autodeterminación. Los Estados a través de la legislación nacional y a través de la cooperación internacional y las ONG tienen que promover el reconocimiento y la efectiva actuación y tutela de todos estos valores supremos. Las libertades que están incluidas en esta categoría se realizan gracias a la intervención del Estado y de las instituciones internacionales, pero también a través de la iniciativa colectiva.

Por último, la cuarta generación contiene los derechos más recientes que están conectados a la evolución de la técnica, de la ciencia, de la informática, es decir, todos los derechos relacionados a la edad contemporánea, por ejemplo, los bio-derechos, el derecho a la seguridad en la red, la privacidad. Se puede sostener que los derechos nacen cuando deben y pueden nacer. Sin embargo, al lado de la concepción de Bobbio emerge la de Pérez Luño que distingue tres generaciones de derechos. La distinción, que no necesariamente es oposición, entre ambas generaciones de derechos se hace patente cuando se considera que en la primera los derechos humanos vienen considerados

como derechos de defensa de las libertades del individuo, que exigen la autolimitación y la no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada y se tutelan por su mera actitud pasiva y de vigilancia.

En la segunda generación, correspondiente a los derechos económicos, sociales y culturales, se traducen en derechos de participación, que requieren una política activa de los poderes públicos encaminada a garantizar su ejercicio, y se realizan a través de las técnicas jurídicas de las prestaciones y los servicios públicos.¹¹

En resumen, describe una tercera generación de derechos humanos que complementa las fases anteriores, referidas a las libertades de signo individual y a los derechos económicos, sociales y culturales. De este modo, los derechos y libertades de la tercera generación se presentan como una respuesta al fenómeno de la denominada contaminación de las libertades, término con el que algunos aluden a la erosión y degradación que aqueja a los derechos fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologías.¹² La revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones del hombre con los demás hombres, las relaciones entre el hombre y la naturaleza, así como las relaciones del ser humano con su contexto o marco de convivencia. Estas mutaciones no han dejado de incidir en la esfera de los derechos humanos. En esta última categoría se hallan el derecho a la paz, la calidad de vida, la libertad informática, el derecho a morir con dignidad, el derecho al cambio de sexo.

Pérez Luño advierte que las generaciones de derechos humanos no entrañan un proceso meramente cronológico y lineal, no implican la sustitución global de un catálogo de derechos por otro; en ocasiones, se traduce en la aparición de nuevos derechos como respuesta a nuevas necesidades históricas, mientras que, otras veces, suponen la redimensión o redefinición de derechos anteriores para adaptarlos a los nuevos contextos en que deben ser aplicados: el catálogo de las libertades nunca será una obra cerrada y acabada.¹³

2. Consideraciones sobre el derecho al medio ambiente

Primero, debe señalarse que no existe una denominación única en la materia: en efecto, a lo largo de la evolución de estos derechos se han utilizado heterogéneas acepciones.

¹¹ PÉREZ LUÑO, A.E., *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Sevilla, 2010, p. 82.

¹² PÉREZ LUÑO, A.E., *Las generaciones de derechos humanos*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2014, p. 200.

¹³ *Ibidem*, p. 217.

Es relevante analizar el carácter jurídico del medio ambiente, determinando su condición de objeto o sujeto de derecho. Esta discusión será esencial a la hora de dilucidar y dar respuesta a la pregunta relativa a si el medio ambiente puede erigirse como un derecho humano por el mero hecho que una parte de la doctrina, o mas bien una posición ideológica llamada '*Deep Ecology*', plantea hacer de la naturaleza un sujeto de derecho debido a que el ser humano no es dueño y señor del medio ambiente, sino parte integrante de él.

Es importante también establecer si el derecho al medio ambiente sea un derecho inviolable. Defendiendo una respuesta afirmativa se tiene que asumir que la protección del medio ambiente está encima de otros derechos que se verían sacrificados para preservar el respeto del medio ambiente. Por el hecho de que el derecho ambiente se originó hace unos pocos años, podemos encontrar en la concepción historicista¹⁴ la razón y la explicación que llevó a la creación de esta nueva rama del derecho. Es decir, el derecho al medio ambiente sano nace como resultado de un avance, sobretodo de la conciencia colectiva, que comenzó a preocuparse en forma siempre mas creciente por el ambiente en el que vivía.

Por otro lado, hay otra parte de la doctrina¹⁵ que no apoya a la concepción histórica y defienden la naturaleza de 'derecho natural' de los derechos humanos, siendo prerrogativas inherentes a la persona humana, sosteniendo su existencia independientemente de su consagración en los ordenamientos jurídicos. Igualmente, otra parte de la doctrina adopta la denominación de 'derechos morales', en relación al origen de este nuevo derecho, haciendo referencia al fundamento ético de los derechos humanos y postulando que tienen tal calidad debido a las exigencias morales comunes y básicas de las personas, existiendo antes de su positivización.¹⁶

De esta manera, si aceptamos una fundamentación iusnaturalista o ética de los derechos humanos y asumimos que el derecho al medio ambiente sano es parte de este grupo, esto implicaría asumir que el medio ambiente supera las fronteras geográficas impuestas por los seres humanos y que su protección es un deber de todos, independiente del país y la nacionalidad que tengamos lo que podría entrar en conflicto con el concepto de soberanía del Estado.

¹⁴ Primer párrafo de este trabajo.

¹⁵ Doctrina iusnaturalista.

¹⁶ QUELLA NARDUCCI, A., *Introducción al derecho*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2000, pp. 158 y 164.

2.1. Qué es el medio ambiente

Las problemáticas relacionadas a la interpretación de la noción de ambiente han desencadenado un debate que, hoy en día, no ha encontrado una solución unívoca sobre el concepto jurídico de ambiente. El derecho al medio ambiente más que un conjunto de normas directas a preservar la conservación de bienes es un derecho dirigido a la tutela del individuo. El objetivo de éste es salvaguardar la vida del hombre, impidiendo la destrucción del territorio y del patrimonio cultural del paisaje. La Declaración de Estocolmo consideró el derecho fundamental del hombre al medio ambiente como el:

“disfrute de unas condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”.¹⁷

La noción de medio ambiente está relacionada con los conceptos de ecosistema, hábitat, recursos naturales y ecología. El término “medio ambiente”:

“se refiere a diversos factores y procesos biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica natural, se enlazan con las conductas del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo económico, político, social, cultural o con el entorno, y hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las empresas, los individuos, los grupos sociales y para la comunidad internacional”.¹⁸

En este sentido, tan importante es la cantidad, como la cualidad. El medio ambiente comprende la totalidad del ecosistema: el agua, el aire, el suelo y la atmósfera. En efecto, el medio ambiente puede determinar la cantidad, la calidad y la sustentabilidad de las actividades humanas y de la vida en general. Por esto, la degradación del ambiente está relacionada con su disminución en cantidad y el deterioro de su calidad.¹⁹

Los problemas medioambientales son una constante en la totalidad del globo terráqueo. Son muchos los problemas de esta índole, contaminación de ríos y mares, contaminación del aire y la atmósfera, deforestación y pérdida de diversidad biológica...etc. Estos problemas se agravan aún más en países en vía de desarrollo.

¹⁷ Declaración de Estocolmo, Principio 1.

¹⁸ QUADRI DE LA TORRE, G., “Políticas Públicas. Sustentabilidad y medio ambiente”, H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Ciudad de México, 2006, p. 2.

¹⁹ PANAYOTOU, T., *Ecología, medio ambiente y desarrollo. Debate, crecimiento versus conservación*, Ciudad de México, 1994, pp. 23-31.

En cuanto al agua, ésta ha sufrido graves problemas de contaminación debido a los vertidos de todo tipo sobre ríos y mares. Además, existe el problema de una escasez de agua potable. Por otro lado, el aire y la atmósfera han sufrido del mismo modo problemas de contaminación. Esta vez son debidos a las grandes industrias, así como la combustión de los vehículos en las zonas de gran congestionamiento urbano. La tierra por su parte también sufre problemas de contaminación y de erosión. Todo esto se ve aún más afectado cuando supone la deforestación vegetal, la disminución de la fauna y el deterioro de la diversidad biológica en general.²⁰

Los problemas ambientales tienen una dimensión de cantidad y una dimensión de calidad. Cuando los problemas de la calidad se vuelven graves, se convierten en problemas de cantidad. Por ejemplo, el agua puede ser inservible a causa de una intensa contaminación; la erosión severa puede producir que la tierra no sea idónea para el cultivo.²¹ Debido a que el medio ambiente afecta en cierta manera a todo y a todos, existen infinitud de enfoques para su estudio. De hecho, el estudio que se lleva a cabo no es sólo biofísico. También puede estudiarse desde un punto de vista social, político, económico o cultural. Existe una gran variedad de enfoques y métodos analíticos para estudiar las complejas relaciones entre el hombre y la naturaleza, o entre la economía y la ecología, como la economía ambiental, la administración y gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, el ‘eco desarrollo’, la economía ecológica y el desarrollo sustentable.²² Por estas razones para comprender mejor la problemática ambiental como efecto de la actividad humana, lo importante es no partir de la perspectiva de las ciencias naturales, sino de las ciencias sociales.²³

La intensificación de la responsabilidad y percepción de la temática ambiental ocurre a partir de la celebración de la Conferencia de Estocolmo en 1972, ya que por primera vez en un foro internacional se conjuntan los aspectos social y económico como ámbitos trascendentales para la conservación del ambiente y de los recursos naturales.²⁴ En esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente nace el llamado *eco desarrollo* o desarrollo sin destrucción, el cual se orientó a poner de manifiesto las consecuencias nocivas que el desarrollo tecnológico e industrial tiene sobre los ecosistemas. Se pretendió armonizar los objetivos sociales y económicos del desarrollo con un

²⁰ http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm.

²¹ PANAYOTOU, T., *Ecología, medio ambiente y desarrollo. Debate, crecimiento versus conservación*, cit., p. 28.

²² *Ibidem*, p. 17.

²³ PORRÚA, M.A., *Recursos naturales y desarrollo sustentable: reflexiones en torno a su problemática*, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Ciudad de México, 2004, pp. 21-23.

²⁴ La Declaración de Estocolmo de 1972 constituye la primera legislación para cuestiones internacionales relativas al medio ambiente. Véase la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 5 al 16 de junio de 1972 en www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm

manejo adecuado de los recursos naturales y del medio ambiente. Al respecto, es oportuno referir que la Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente menciona que:

*“desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”*²⁵.

2.2. Qué se entiende por derecho a un medio ambiente sano y adecuado

Para entender cuando nació el derecho al medio ambiente se puede adoptar la definición de derecho humano de Pérez Luño, es decir, un “conjunto de facultades que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”²⁶.

Es interesante analizar que el derecho al medio ambiente empezó a ser reconocido gradualmente por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales hace unos pocos años. Es significativo señalar a este propósito que la doctrina reconoció el carácter de *Jus cogens* a los derechos humanos, entendiéndose por tal aquella norma “aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.²⁷ En este sentido es importante poder establecer si el derecho a un medio ambiente sano forma parte de aquellos derechos que tienen carácter de *Jus cogens*.

Cabe destacar que no todos derechos humanos pueden ser considerados *Jus cogens*, sino solo aquellos que forman parte del núcleo duro de los derechos humanos. Se señala que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido en distintos instrumentos de derechos humanos y, por lo tanto, podría ser considerado *Jus cogens*. El derecho al medio ambiente sano nace como consecuencia de una evolución de la conciencia colectiva que se fue preocupando en forma creciente por el entorno natural y su protección. Como resultado de esta evolución histórica, el mundo ha advertido el efecto que tiene la protección del entorno para preservar y condicionar los aspectos mas relevantes de la vida humana, lo cual ha contribuido a forjar una nueva rama del derecho que cada vez adquiere mayor especialidad y especificación.

²⁵ World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987, p. 4.

²⁶ PÉREZ LUÑO, A.E., *Los Derechos Humanos, significación, estatuto jurídico y sistema*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, pp. 14-15.

²⁷ Artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Empezando por un análisis del termino se puede afirmar que el medio ambiente es “el conjunto de todas las fuerzas o condiciones externas que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad”.²⁸

Esta definición de medio ambiente no resalta al ser humano como elemento base. Se puede notar un cambio de perspectiva y de esta manera el hombre pierde el privilegio de ser el fin que el derecho protege. Así, se pasa a convertir a la naturaleza como sujeto de derecho: el hombre deja de ser el foco preocupación del derecho. Por lo tanto, se puede concluir que por medio ambiente se tienen que entender todos los factores naturales del entorno físico, químico y biológico que actúan de forma interrelacionada condicionando la existencia y la calidad de vida del ser humano. No se deben incluir otros valores que están protegidos por otros derechos fundamentales porque esto limitaría la posibilidad de una protección eficaz.

Cabe evidenciar que el derecho al medio ambiente se encuentra relacionado a otros derechos humanos:

- El derecho a un medio ambiente seguro y saludable;
- El derecho a la salud;
- El derecho a un desarrollo sustentable;
- El derecho a la calidad de vida adecuado, incluyendo el acceso a alimentación y agua potable;
- El derecho de los niños para vivir en un medio ambiente apropiado para su desarrollo físico y mental;
- El derecho a vivir de las futuras generaciones;
- El derecho a una participación completa y equitativa de todas las personas en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, la planificación de desarrollo y decisiones y políticas que afecten a la comunidad a un nivel local, nacional, regional e internacional;
- El derecho a gozar de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo;
- El derecho a la protección para la no -discriminación en cualquier área;
- El derecho a la educación e información incluyendo la relacionada con vínculos entre salud, medio ambiente y riesgo;

²⁸ RODAS MONSALVE, J.C., *Protección Penal y Medio Ambiente*, PPU - Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1994, p. 61.

- El derecho a compartir los beneficios del progreso científico y la tecnología y la responsabilidad que esto implica.²⁹

Entonces el significado que adquiere el concepto de ambiente desde el punto de vista jurídico tiene un doble aspecto: como parte del derecho de toda persona a disfrutar de éste y como objeto de protección, se convierte en un concepto “nuclear”, es decir, un concepto del que se derivan otros tipos de derechos y por el que se alteran muchos de los derechos ya existentes.³⁰

Si bien el medio ambiente es el bien jurídico protegido, titular de derecho es el hombre: todas las personas tienen derecho a tener un medio ambiente sano y adecuado, y tienen, además, la responsabilidad de salvaguardarlo para las generaciones posteriores. El medio ambiente presenta la particularidad de ser un bien colectivo por lo tanto nadie puede ser considerado dueño o propietario del aire o de la biodiversidad. Aun cuando puedan ser muchas las personas afectadas por el daño al entorno, la titularidad de los derechos fundamentales corresponde siempre a personas individuales.

Para enfrentar esta complejidad se señala una doctrina que precisa distinguir la titularidad de los bienes ambientales de la titularidad del derecho fundamental.³¹ Se señala que:

*“El derecho a vivir en un medio ambiente adecuado sería un derecho que solo puede ser disfrutado por las personas naturales, puesto que se trata de un derecho a vivir con una relación con el ambiente, en términos de calidad o con bienestar. Este derecho supone un disfrute, una especial capacidad sensitiva y también de características biológicas para relacionarse con el medio, relación que solo pueden tener los seres humanos y no los entes ficticios”.*³²

Pero las complejidades relativas a la titularidad del derecho no se acaban: aun cuando aceptásemos sin reserva alguna el hecho de que el derecho del medio ambiente pertenece únicamente a personas naturales las cuales son titulares del derecho fundamental, queda pendiente el determinar si estas personas deben existir necesariamente en el tiempo presente. En este sentido la Declaración de Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, Estocolmo 1972, estableció:

²⁹ CARMONA, L.M.D.C., *Derechos humanos y medio ambiente*, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2001, p. 23.

³⁰ *Ibidem*, p. 24.

³¹ BORDALI SALAMANCA, A., “El derecho fundamental a vivir en un medio ambiente adecuado ¿a quién protege?, ¿a quienes protege?”, *Gaceta Jurídica*, Santiago de Chile, 1999, p. 20.

³² *Ibidem*, p. 20.

“El deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

Por su parte, el Convenio de Aarhus de 1998 sobre Acceso a la Información, Participación Pública en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Materias Ambientales afirma que:

“toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente adecuado para su bienestar, y el deber, tanto individual como en asociación con otros, de proteger y mejorar el ambiente para beneficio de las generaciones futuras”.

Ahora bien, aunque es obvio que la protección del entorno de las personas actuales incide directamente en el bienestar de las generaciones futuras y se reconozca el deber de resguardar el medio ambiente para las generaciones futuras, esto no significa que el bien jurídico tutelado sea el bienestar de las personas que vendrán. En efecto, las garantías fundamentales son derechos reconocidos a los seres humanos que viven en el tiempo presente, aunque los deberes que estos impongan limiten los poderes públicos y los derechos de las personas presentes que incidan en la naturaleza material del hombre.³³

El derecho a un ambiente adecuado es también un derecho indivisible, sustancialmente por la constatación de que el ataque al entorno supone una degradación del macro ambiente al que todos tenemos derecho. Se trata de un derecho que debe basar gran parte de su aplicación y efectividad en la coordinación y en la solidaridad. “Es un nuevo derecho que responde a nuevos retos”.³⁴Y uno de estos retos es precisamente como se establece la responsabilidad de los diferentes actores en el ejercicio de este derecho. Por todo lo dicho, siendo el derecho al medio ambiente una nueva rama del derecho es importante saber donde colocarlo en el universo de los derechos humanos.

En el primer párrafo del presente trabajo se ha analizado la doctrina que divide las tres generaciones de derechos y ahora es útil hacer referencia a la generación de garantías a la que pertenece el derecho al medio ambiente. En particular modo los derechos de tercera generación son inherentes a los grupos de personas y requieren de la asistencia de los Estados y sobretodo de la comunidad internacional para ser protegidos efectivamente, siendo las garantías basadas en la

³³ *Ibidem*, p. 26.

³⁴ CARMONA, L.M.D.C., *Derechos humanos y medio ambiente*, cit., p. 15.

solidaridad a nivel mundial.³⁵ La doctrina postula que los principales derechos de esta categoría serían el derecho a un medio ambiente equilibrado, el derecho a la paz y el derecho al desarrollo.

Por otra parte, se ha manifestado una opinión según la cual los derechos ambientales no encajan perfectamente en ninguna de las generaciones, sino que abarca las tres. Primero, tomando como base los derechos civiles y políticos, su papel sería el entregar facultades, facilitando la participación en la toma de decisiones y exigiendo a los gobiernos que cumplan con las normas mínimas de vida y de propiedad protegiéndolos del daño ambiental. Una segunda posibilidad es tratar un ambiente sano, saludable o viable como un derecho económico o social similar a aquellos protegidos en el Pacto de 1966, lo que daría a la calidad ambiental un estatus comparable a otros derechos de esta categoría con prioridad sobre los objetivos no basados en derechos. La tercera opción, tratarlo como un derecho de solidaridad, significaría la cooperación de los gobiernos y organizaciones internacionales para entregar los recursos necesarios con el fin de lograr la realización de objetivos ambientales. Sus principales beneficiarios serían los Estados en desarrollo, pero difícilmente podría considerársele como un derecho humano en el sentido ortodoxo del término.³⁶

Sin duda el derecho al medio ambiente es un derecho que exige de acciones reguladas para que sea garantizado.

³⁵ BOYLE, A., *Los derechos ambientales y el Derecho internacional*, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2003, pp. 41-42.

³⁶ *Ibidem*, pp. 43-44.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL SISTEMA EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

1. Instrumentos de protección del medio ambiente

Se puede considerar que, generalmente, la tutela del ambiente representa un objetivo común de la humanidad y que es una exigencia fundamental para asegurar la supervivencia y el progreso de la comunidad civil. La velocidad del calentamiento global y de la reducción de los recursos comunes de sustentamiento han cambiado la concepción anterior, según la cual, la protección del medio ambiente era prerrogativa solamente de los Estados.³⁷

La creciente sensibilidad en esta materia ha llevado a una regulación convencional siempre mas incisiva en la tutela de los componentes del ambiente y en una producción de disposiciones de carácter consuetudinario. En relación con las fuentes de natura consuetudinaria se puede compartir la opinión según la cual existen varias normas como, por ejemplo, las obligaciones de informar a los Estados en caso de inminente peligro de accidente ambiental, o la obligación de negociación del Estado responsable del daño ambiental y la prohibición de contaminación fronteriza.³⁸

Los Estados tienen las obligaciones de prevención, precaución y reparación. En relación con esto, los Estados tienen que adoptar conductas directas a prevenir el daño ambiental.³⁹ Si bien se comparte la opinión según la cual existen normas consuetudinarias en materia de medio ambiente, la doctrina está dividida acerca de la existencia de normas de Derecho internacional codificadas y que prevean una obligación general de los Estados de proteger el medio ambiente.⁴⁰

³⁷ GOODMAN, A. R., "Toward an Institutional Theory of Sovereignty", *Stanford Law Review*, Vol. 55, Stanford, 1987, p. 101.

³⁸ CONFORTI, B., *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 182.

³⁹ Declaración de Rio de Janeiro, Principio 2 "De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional".

⁴⁰ POSNER, E. A., *The Limits of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 33.

Existen muchas dudas, sobre todo, acerca de la compatibilidad de una norma de Derecho internacional con el principio de soberanía de los Estados y de sus recursos naturales a pesar de las convenciones internacionales en materia de medio ambiente.

La existencia de un principio fundamental que impone la tutela del ambiente como valor supremo del ordenamiento jurídico internacional proporciona muchas iniciativas por parte de las Naciones Unidas. Durante la Conferencia de Copenhague, los Estados han declarado la necesidad de introducir como parte importante de sus políticas de desarrollo la cuestión medioambiental, de manera que, la tutela del ambiente puede medir el progreso de los mismos Estados. Esta exigencia ha sido manifestada por parte de casi todos los Estados partes de las UN, lo que hace pensar en cómo el deber de protección del ambiente es vinculante de manera general para todos los Estados.

Sin embargo, la obligación de protección nace también como resultado de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 13 de julio de 2009 (Caso *Costa Rica-Nicaragua*) sobre la legitimidad de las intervenciones para regular la navegación del río situado en la frontera entre ambos Estados. En este caso la Corte observó que los intereses habían cambiado durante los años y que entre los intereses públicos más relevante tenía que figurar la tutela del medio ambiente. Se ha encontrado en la protección del ambiente un interés público capaz de limitar y condicionar el ejercicio de otros derechos.⁴¹

En los apartados a seguir se podrá observar como el continente europeo cuenta con una serie de instrumentos regionales que otorgan un marco jurídico a la protección del derecho al medio ambiente sano.

2. Sistema Europeo

La evolución de la legislación de la Unión Europea, que culminó con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ha generado un vínculo orgánico entre las disposiciones de la Unión Europea sobre la protección de los derechos humanos y la legislación de la Unión Europea sobre derechos humanos.

⁴¹ “*The Court considers that, over the course of the century and a half since the 1858 Treaty was concluded, the interests which are to be protected through regulation in the public interest may well have changed in ways that could never have been anticipated by the Parties at the time: protecting the environment is a notable example. As will appear from the rulings made later in this Judgment (see paragraphs 104, 109, 118, 127 and 141), Nicaragua, in adopting certain measures which have been challenged, in the Court’s opinion, is pursuing the legitimate purpose of protecting the environment*”.

La protección de los derechos humanos puede, de hecho, considerarse una parte sustancial del derecho vivo de la Unión Europea, lo que ocurrió primero gracias a la evolución de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, luego, en virtud de la disposición expresa de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el marco de disposiciones específicas de los Tratados en los que se basa la Unión. El punto de llegada de este proceso debe verse en la proclamación en 2000 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea⁴², a la que el Tratado de Lisboa⁴³ ha atribuido expresamente la fuerza de derecho primario de la Unión. Otra prueba de ello es la creación de la Agencia de los Derechos Fundamentales,⁴⁴ cuya estrecha cooperación declarada con el Consejo de Europa demuestra no sólo el creciente interés de la Unión por los derechos humanos, sino también su voluntad de llevar a cabo una acción que se ajuste sustancialmente a la llevada a cabo por el Consejo de Europa, con vistas a crear “una plataforma para los derechos fundamentales”.⁴⁵

Con la decisión de la Unión de adherirse a la Convención se han sentado las bases para crear un verdadero espacio constitucional europeo, una Convención⁴⁶ que, *de jure*, nos permita vislumbrar la institucionalización de las relaciones directas y formales entre el Tribunal de la C.E.D.H. y el Tribunal de Justicia de la UE. Con la aceptación de la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, la Unión estará sometida, de hecho, al control externo de este Tribunal, de modo que se formalizará el vínculo entre los dos tribunales.

Rodríguez Iglesias en su discurso en la ceremonia de apertura del año judicial de la Corte C.E.D.H. en enero de 2002 dijo:

“Nuestras dos Cortes comparten un compromiso existencial con los valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de Europa, sobre cuya base se encuentran la democracia y los derechos fundamentales, y de este modo contribuyen, junto con las jurisdicciones supremas y constitucionales nacionales, al surgimiento de lo que se ha definido como un “espacio constitucional europeo”.

⁴² DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, J., *The Protection of Fundamental Rights in the EU: Community of Values with Opt-Out?, Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution?*, Nomos, Sofia, 2008, pp. 119-130.

⁴³ ROSSI, L.S., “How Fundamental is a Fundamental Principle? Primacy and Fundamental Rights after the Lisbon Treaty”, *Yearbook of European Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 66.

⁴⁴ La Agencia de los Derechos Fundamentales tiene su sede en Viena y ha sido creada por el Reglamento n. 168/2007 del 15/02/2007.

⁴⁵ Tal y como se desprende de la plataforma online de la Agencia.

⁴⁶ ZAGREBELSKY, V., “La prevista adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, artículo publicado online en *Europenrights.eu*, 2015.

Aunque este no es el lugar para profundizar en las modalidades, el calendario y las consecuencias de la adhesión prevista a la UE. a la C.E.D.H., quedan los datos de la previsión normativa expresa, elemento que, para sé, representa una innovación sustancial y de segura importancia histórica, que ratifica la centralización y la peculiar estructuración de la protección de los derechos humanos en el continente europeo y en el contexto de la Unión Europea de una manera particular.⁴⁷

A este respecto, es especialmente importante subrayar la importancia de las disposiciones de carácter horizontal contenidas en los artículos 52 (en particular en el apartado 3 de dicho artículo) y 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tienen por objeto garantizar la coherencia de los dos instrumentos legislativos en lo que se refiere a los derechos reconocidos en ambos.

Debe recordarse, de hecho, que tal caso de conformidad con el arte. 52, par. 3, cit. y las correspondientes aclaraciones interpretativas del Presídium que redactó la Carta, en la medida en que los derechos previstos en la misma corresponden a derechos también garantizados por la C.E.D.H., su significado y alcance son idénticos a los previstos en el Convenio, teniendo en cuenta no sólo el texto de las disposiciones que los sancionan, sino también la forma en que han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Por lo tanto, se puede afirmar la existencia de un derecho al medio ambiente en la Unión Europea como una posición jurídica subjetiva autónoma que entra dentro de los derechos fundamentales del sistema jurídico.⁴⁸

Hay que decir, por tanto, que las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea coinciden perfectamente con las disposiciones de los convenios de los que la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo ha deducido progresivamente la existencia del derecho al medio ambiente. En particular, el artículo 8 de la C.E.D.H.,⁴⁹ la disposición más utilizada para incluir la protección del medio ambiente entre las posiciones jurídicas protegidas por la Convención corresponde exactamente al artículo 7⁵⁰ de la Carta. Del mismo modo, el artículo 47 de la Directiva establece el derecho a un recurso efectivo y a un juicio justo, norma que coincide con las disposiciones

⁴⁷ DE SALVIA, M. y ZAGREBELSKY, V., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, Giuffrè, Roma, 2008, p. 398.

⁴⁸ PEDERSEN, O. W., "European Environmental Human Rights and Environmental Rights: A Long Time Coming?", en *The Georgetown International Environmental Law Review*, Londres, 2009, p. 73.

⁴⁹ Sobre el respecto de la vida privada y familiar.

⁵⁰ "Cada individuo tiene derecho a que respete su propia vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones".

de los artículos 6 (derecho a un juicio justo) y 13 (derecho a un recurso efectivo) de la Directiva. Son precisamente estas disposiciones las que la jurisprudencia convencional ha utilizado para modular los aspectos procesales y la protección del derecho al medio ambiente en el sistema de la C.E.D.H. (Casos *Guerra contra Italia* y *Giacomelli contra Italia*).

El derecho a la vida, consagrado en el artículo 2 de la Convención, también está protegido por la C.E.D.H. en el artículo 2;⁵¹ y se ha considerado que, en algunas sentencias, el Tribunal de Estrasburgo consideró fundadas algunas denuncias relativas a episodios de degradación del medio ambiente, en las que se alegaba una violación del derecho a la vida, a pesar de que los hechos denunciados no habían conducido directamente a la muerte de los denunciantes.

El artículo 37 de la Carta, titulado “Protección del medio ambiente”, establece que

“un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de la calidad del medio ambiente deberán integrarse en las políticas de la Unión y garantizarse de conformidad con el principio de desarrollo sostenible”.

Estas observaciones son también válidas para introducir una necesaria reflexión de carácter sistemático sobre la calificación del medio ambiente como valor jurídico autónomo, objeto, precisamente, de un derecho humano nuevo y distinto.

El hecho de que represente una síntesis de *res communes omnium* como el agua, el aire, la luz, el calor atmosférico, o elementos que no son bienes económicos para sí porque no son susceptibles de apropiación, no es de hecho un obstáculo para la calificación del medio ambiente como un bien jurídico autónomo. Esto se debe a que es bien sabido que, para calificar un derecho subjetivo, no es esencial tener la posibilidad de apropiarse del bien objeto del derecho; en cambio, la aptitud de este bien para satisfacer un interés del titular es suficiente. Por lo tanto, no sólo aquellos que pueden satisfacer exclusivamente un interés propio, individualmente considerado, sino también los bienes de los que se derivan las utilidades para la comunidad y, en consecuencia, para los individuos, deben ser considerados bienes legales para el sujeto. Esto es particularmente cierto en el caso de los bienes que, en la medida en que se relacionan con las necesidades fundamentales de la persona, están protegidos por normas de carácter publicitario como sujetos de derechos que incumben a cada ser humano.

⁵¹ Le sigue el artículo 3, destinado a proteger el derecho a la integridad de la persona, que es el complemento de la disposición anterior. En este sentido, la protección explícita que proporciona la Carta parece ser más completa que la protección garantizada por la C.E.D.H. que, a pesar de haber deducido el derecho a la integridad física como corolario del derecho a la vida, no lo ha regulado expresamente.

Se trata precisamente del derecho al medio ambiente, reconocido y protegido por la normativa interna e internacional como un bien jurídico intangible unitario, compuesto por múltiples componentes, cada uno de los cuales puede protegerse por separado.

Además, las violaciones ambientales casi siempre infringen o ponen en peligro otros derechos, es decir, son de naturaleza múltiple. En estos casos, las acciones que pueden proponerse son también las previstas para la protección de estos derechos: es el caso, por ejemplo, de los acontecimientos perjudiciales para la salud del medio ambiente cuando puedan afectar al derecho a la salud, de los hechos que afecten a los derechos de propiedad o a los derechos de disfrute o de los hechos que vulneren el derecho al respeto de la vida privada y familiar, etc...

Además, de la evolución de la jurisprudencia se desprende que se ha llegado a configurar un derecho distinto al medio ambiente precisamente a través de la interrelación con los derechos humanos tradicionales, percibiendo, sin embargo, su diversidad ontológica con respecto a los bienes individuales objeto de estos derechos. Desde otro punto de vista, la existencia del derecho al medio ambiente como derecho fundamental de la Unión Europea también puede deducirse de otro parámetro importante, a saber, la referencia contenida, en particular, en el apartado 3 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea a las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros que forman parte del derecho de la Unión como principios generales, expresiones similares figuran también en el Preámbulo y en el apartado 4 del artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

A este respecto, es oportuno recordar que la inclusión de la protección del medio ambiente en la casi totalidad de las disposiciones de rango primario de los Estados que se adhieren a la Unión Europea se ha traducido en términos concretos en las disposiciones constitucionales internas, de un derecho individual específico a beneficiarse de un medio ambiente sano, o en normas primarias que delegan esta tarea en los propios Estados, los cuales están obligados a adoptar medidas detalladas adecuadas para dar contenido a las disposiciones constitucionales pertinentes. Por lo tanto, no cabe duda de que el derecho al medio ambiente como instrumento para proteger el bien jurídico medioambiental está constantemente previsto a nivel interno.

En los pocos casos en que se ha ocupado de la cuestión⁵², el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sin embargo ha tenido un enfoque metodológico caracterizado por una especial apertura, identificando estos principios no sólo a partir de una evaluación cuantitativa de los sistemas estatales que convergen en determinadas previsiones, sino también en la calidad de la

⁵² Caso *Hautala contra Consejo de la Unión Europea*, n. 353/99.

solución a elegir, optando por la que parece ser la mejor, la más adecuada para los objetivos y la estructura del sistema comunitario. No parece posible dudar de que, la solución más conveniente y de orientación ‘constitucional’, útil, por tanto, para dar concreción a lo dispuesto en el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales, es precisamente la identificación del derecho al medio ambiente como disposición normativa presente directa o indirectamente en la casi totalidad de los ordenamientos jurídicos de la Unión, cuyo contenido sustancial mínimo se encuentra en los principios consagrados en el apartado 2 del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 173 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea), y también

“sobre el principio de precaución y los principios de acción preventiva, que los daños al medio ambiente deben rectificarse prioritariamente en la fuente y en el principio de que quien contamina paga”.

Por otra parte, esta conclusión parece confirmada por la lectura de las posiciones del Abogado General de la Unión Europea Lager en el caso, según el cual, a efectos del reconocimiento de los derechos fundamentales no es necesario para identificar una convergencia en términos del sistema jurídico, pero la existencia de un concepto común es suficiente.⁵³

También parece útil subrayar cómo la discrecionalidad sustancial que ha caracterizado las posiciones de la Corte de la UE también se deriva del sentimiento de que es necesario tener en cuenta adecuadamente la evolución natural de los principios fundamentales, de acuerdo con los cambios sociales y las indicaciones procedentes de los tratados internacionales de derechos humanos de los que son parte los Estados miembros individuales. Y en este sentido, la frecuente referencia a la C.E.D.H. y su interpretación por el Tribunal de Estrasburgo, cerrará probablemente el círculo sobre el reconocimiento del derecho al medio ambiente en la legislación de la UE.

A este respecto, sigue pareciendo útil mencionar las palabras del Abogado General Lager en el asunto *Consejo/Hautala*, quien, tras subrayar la intercambiabilidad mutua de las tradiciones constitucionales comunes y de los tratados internacionales como dos fuentes principales de inspiración para el Tribunal en la labor de reconocimiento y definición de los derechos fundamentales, afirmó que:

⁵³ Como señaló el Abogado General Lager en el litigio *Consejo/Hautala*: “Basta con que los Estados miembros adopten un enfoque común del derecho en cuestión (es decir, el derecho de propiedad en el caso de que se trate), que atestigua la misma voluntad de garantizar su protección, aunque el grado de protección y la forma en que se ejerce difieran de un Estado a otro”.

“la convergencia de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros puede bastar para establecer la existencia de uno de estos principios sin que sea necesario obtener confirmación de su existencia o de su contenido mediante el recurso a normas internacionales”.

2.1. La protección del ambiente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso *Arrondelle contra Reino Unido* y Caso *Guerra contra Italia*

La transposición en el plano jurídico de la relación entre el hombre y el medio ambiente es el eje central en torno al cual se ha desarrollado la reflexión sobre la jurisprudencia interna, supranacional e internacional, y que se ha esforzado por reconstruir con suficiente claridad los contornos de esta interrelación.

Habiendo comprobado la interdependencia e inseparabilidad entre los objetivos de preservar la existencia humana y la protección del medio ambiente, las conclusiones propuestas para el logro de estos objetivos son muy diferentes según el enfoque elegido, el método utilizado y la perspectiva del intérprete.⁵⁴ En este sentido, el camino abierto en 1972 por la famosa Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano y por la Declaración correspondiente ha demostrado ser de considerable interés, un instrumento internacional que, aunque dentro de los límites de su ámbito no vinculante, ha reconocido la estrecha interconexión entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Así, después de la Conferencia de Estocolmo se fue afirmando progresivamente un enfoque basado en los derechos, con el fin de integrar la protección del medio ambiente en el amplio marco de los derechos humanos, de diferentes maneras, haciendo uso de la eficacia particular que se les reconoce universalmente y de la eficacia particular de determinados órganos encargados de supervisar su observancia.

La lucha contra la degradación del medio ambiente ha continuado, extendiéndose desde el nivel interestatal hasta el nivel de los individuos, que también desde este punto de vista se afirman cada vez más como nuevos actores decisivos en el escenario del Derecho internacional.

Aunque, de hecho, los principales tratados internacionales para la protección de los derechos humanos no contienen referencias explícitas a los derechos ambientales, varios organismos judiciales

⁵⁴ REITZE, JR. A.W., “Environmental Policy – It is time for a New Beginning”, *Columbia Journal of Environmental Law*, Columbia, 1989, p. 111.

y cuasi-jurisdiccionales establecidos convencionalmente⁵⁵ han desarrollado una jurisprudencia que, mediante la protección de los intereses ambientales dentro de las posiciones jurídicas subjetivas garantizadas por ellas ha ido quedando gradualmente subsumida.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos⁵⁶ ha desempeñado un papel protagonista en este proceso evolutivo y ha ido prestando cada vez más atención a la protección del medio ambiente, contribuyendo decisivamente a aportar nuevas visiones al debate doctrinal sobre la existencia y el contenido, al menos en el contexto regional europeo, del derecho al medio ambiente, hasta el punto de que ha hablado explícitamente de la existencia del derecho humano a un medio ambiente sano; y esto, a pesar de la existencia de dicho derecho no figura en la lista positiva de los derechos fundamentales protegidos por el Convención Europea de Derechos Humanos.

La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo se caracteriza por su dinamismo y por su evolución, destinado a adaptar las disposiciones a la cuya tutela está sujeto a cargo de los valores y preocupaciones más compartidos en los distintos momentos, a la luz de los nuevos conocimientos científicos y técnicos. Llegó la Convención, de hecho, definido en una decisión bien conocida de 1978, entonces repetidamente tomada por sucesivos como

“un instrumento vivo que debe interpretarse a la luz de las necesidades actuales de la sociedad”.⁵⁷

El progresivo surgimiento de emergencias a nivel planetario y la consiguiente concienciación generalizada sobre el desarrollo de medidas de protección de los recursos naturales ha contribuido inevitablemente a influir en el criterio del Tribunal de Estrasburgo, que, desde los años ochenta, ha identificado en numerosas decisiones la protección del medio ambiente como un objetivo legítimo capaz de justificar restricciones al ejercicio de los derechos individuales garantizados por el Convenio.

⁵⁵ El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también la Comisión Africana de Derechos Humanos, el Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus y, sobre todo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han adoptado repetidamente decisiones que han sancionado el papel central de la protección del medio ambiente para promover la plena realización de los derechos humanos preexistentes, haciendo, en particular, la defensa del medio ambiente entre las posiciones jurídicas protegidas por el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al respeto de la vida privada y familiar, los derechos culturales y el derecho a la propiedad.

⁵⁶ GALISONGA, A., “European Court of Human Rights, Introductory Note”, en *The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence*, vol. 2, New York, 2009, p. 1501.

⁵⁷ Caso *Taylor contra Reino Unido*, Application n. 5856/72, Judgment del 25 abril 1978: “The European Convention on Human Rights is a living instrument which must be interpreted in the light of the present days conditions”.

Sin embargo, la primera vez que los tribunales de Estrasburgo consideraron aceptable que la contaminación ambiental minara las posiciones subjetivas protegidas por el Convenio - específicamente el derecho al respeto de la vida privada y familiar- se produjo en el caso *Arrondelle contra el Reino Unido*⁵⁸, en el que admisible por la Comisión de Derechos Humanos el 15 de julio de 1980.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada por el propietario de una casa en las afueras de Londres llamada ‘Gable Cottage’ debido al excesivo ruido causado tanto por el continuo sobrevuelo de aviones en el cercano aeropuerto de Gatwick, como por el tráfico de una carretera que da servicio al aeropuerto construido a sólo 150 metros de su casa. Concretamente, el demandante alegó que la situación era tal que violaba su derecho a la vida privada y familiar a residir en el ‘Gable Cottage’, y también denunció la violación de su derecho al respeto de su propiedad privada - consagrado en el artículo 5 del Estatuto- y de su derecho a un juicio justo. Por último, el demandante invocó una infracción del artículo 81, apartado 1, del Tratado CE. 6 de la C.E.D.H., por falta de acceso a los tribunales civiles: la ley sobre aviación civil, de hecho, impuso una prohibición general de interponer acciones por daños y perjuicios contra aeronaves civiles en vuelo o en tierra.

Al examinar el recurso, el Gobierno inglés se opuso a la falta de agotamiento de los recursos internos, pero la Comisión rechazó estas alegaciones, al considerar que, de hecho, el demandante no disponía de ningún recurso interno. Por consiguiente, mediante decisión de 15 de julio de 1980, la Comisión declaró la admisibilidad del recurso. Sin embargo, el litigio se cerró sin pronuncia sobre el fondo, dado que se había alcanzado un acuerdo entre las partes, en virtud del cual el demandante accedió a recibir del Gobierno inglés la suma de 7.500 libras esterlinas a cambio de que se reconociera que dicha suma se había pagado meramente como resultado de la gratitud y que no podía imputarse al Reino Unido ninguna infracción del Convenio.

Un avance significativo en la protección de los intereses ambientales se produjo en 1998 con la sentencia *Guerra y otros contra Italia*⁵⁹, en la que el Tribunal, como resultado de un asunto complejo y articulado, reafirmó lo establecido en el caso *López-Ostra contra España*, al considerar que la presencia de un macizo la contaminación del medio ambiente podría perjudicar el bienestar de las personas al prevenir para disfrutar plenamente de su domicilio y, por lo tanto, afectar negativamente a la vida privada y familiar, (“*severe environmental pollution may affect individuals*’

⁵⁸ Caso *Arrondelle contra Reino Unido*, Application n. 7889/77, Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 15/07/1980.

⁵⁹ Caso *Guerra y otros contra Italia*, Application n. 14967/89, Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 19/02/1998.

well- being and prevent them from enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely, without, however, seriously endangering their health”)⁶⁰.

En el presente caso, además, los jueces de Estrasburgo ampliaron el ámbito de aplicación del artículo 8 del Convenio para incluir un derecho específico del público a tener acceso a las autoridades competentes y, sobre todo, a recibir información adecuada sobre los riesgos medioambientales.

En particular, el Tribunal consideró que había motivos suficientes para integrar una violación del artículo 8 por razones medioambientales por el hecho de que el Estado demandado (Italia) no adoptaba las medidas adecuadas para informar adecuadamente a la población local (los ciudadanos de Manfredonia, en Apulia) de los graves riesgos a los que se enfrentaban al vivir en un lugar particularmente expuesto al riesgo de contaminación medioambiental, en caso de que se produjera un accidente en una planta industrial cercana (Enichem).⁶¹ Los jueces de Estrasburgo reiteraron el principio según que el artículo 8 de la C.E.D.H., los Estados no sólo deben abstenerse de perturbar el libre ejercicio de los derechos que en él se consagran, sino también de adoptar las medidas positivas necesarias para garantizar el respeto de la vida privada y familiar; de manera que, en los casos en que esas posiciones jurídicas subjetivas se vean concretamente comprometidas por condiciones de degradación objetiva del medio ambiente, incumbe al Estado de que se trate preparar todas las medidas apropiadas para remediar la situación.⁶² Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estas medidas incluyen no sólo las destinadas a reducir o eliminar los daños ambientales, sino también las necesarias para informar a las personas potencialmente afectadas por la contaminación ambiental de los riesgos causados por las actividades industriales peligrosas.

Aunque formalmente se refiere sólo a la protección del derecho a la vida privada y familiar, la sentencia Guerra representa un paso importante hacia el reconocimiento por el Tribunal de Estrasburgo del derecho al medio ambiente, contribuyendo a identificar uno de los aspectos centrales

⁶⁰ *Caso Guerra contra Italia, Application n. 14967/89, Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 19/02/1998, párrafo 60.*

⁶¹ *Ibidem*: “In the instant case the applicants waited, right up until the production of fertilisers ceased in 1994, for essential information that would have enabled them to assess the risks they and their families might run if they continued to live at Manfredonia, a town particularly exposed to danger in the event of an accident at the factory. The Court holds, therefore, that the respondent State did not fulfil its obligation to secure the applicants’ right to respect for their private and family life, in breach of Article 8 of the Convention. There has consequently been a violation of that provision”.

⁶² *Ibidem*: [...] *The direct effect of the toxic emissions on the applicants’ right to respect for their private and family life means that Article 8 is applicable. [58]. The Court considers that Italy cannot be said to have “interfered” with the applicants’ private or family life; they complained not of an act by the State but of its failure to act. However, although the object of Article 8 is essentially that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities, it does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in effective respect for private or family life (see the Airey vs Ireland judgment of 9 October 1979, Series A no. 32, p. 17, párrafo 32)”*, párrafo 57.

de la llamada dimensión procesal de este derecho, a saber, el derecho de acceso activo y pasivo a la información medioambiental.

La Corte decidió específicamente ampliar el alcance de la protección prevista en el artículo 8, por lo que consideró que se trataba de una violación de este aun cuando se encontraran obstáculos para el libre acceso a la información ambiental u omisiones en su divulgación por parte de las autoridades. Significativamente, de esta manera el acceso a la información ambiental se convirtió, por lo tanto, en objeto de un derecho protegido por la C.E.D.H., no directamente a través de la referencia más natural al artículo 10, sino indirectamente mediante la subsunción del derecho a la vida privada y familiar en el sistema. Por lo tanto, el artículo 8 del Convenio se impuso, como una disposición privilegiada dentro de la cual se pueden incluir quejas ante la Corte basadas de diversas maneras en episodios graves de contaminación ambiental. Al mismo tiempo, de conformidad con las disposiciones de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente Humano, el acceso a la información sobre el medio ambiente se identificó como uno de los instrumentos normativos fundamentales para la protección del medio ambiente, que adopta la forma de una condición previa necesaria para permitir -también como medida preventiva- que los ciudadanos y las asociaciones individuales contribuyan eficazmente a este desafío.

2.2. La violación del derecho a la vida como posible consecuencia de una grave contaminación ambiental

En la mayoría de los casos en que el Tribunal ha encontrado que las disposiciones del Convenio han sido infringidas por factores ambientales, ha analizado las quejas pertinentes a través del sistema ofrecido por el artículo 8 del Convenio.

Sin embargo, también ha habido casos en los que, conscientes de las desastrosas consecuencias que pueden tener las emergencias medioambientales, los jueces de Estrasburgo han considerado, además, que los fenómenos de contaminación grave podían dar lugar a una violación del artículo 2 del Convenio, que protege el derecho a la vida.

Tras algunos casos que se remontan a finales de los años noventa, en los que el Tribunal declaró inadmisibles los recursos interpuestos con arreglo al artículo 2 por falta de pruebas de los perjuicios sufridos por las víctimas⁶³, y a pesar del reiterado deniego a calificar los fenómenos de

⁶³ Caso *Tauira y otros contra Francia* (Decisión de la Comisión Europea de derechos humanos del 4/12/1995).

degradación ambiental como violación del artículo 2⁶⁴, frente a un caso de especial incidencia, como el de ciudadano turco Oneryildiz, el Tribunal no pudo dejar de declarar que se había cometido, por parte de Turquía, una violación del derecho a la vida.

La historia tiene su origen en un suceso catastrófico ocurrido en un suburbio de Estambul, donde una explosión dentro de un vertedero no autorizado y sin ningún sistema de seguridad, causó la muerte de más de veinte personas que residían en edificios improvisados, igualmente no autorizados, en un área adyacente al mismo vertedero. Un miembro de la familia de algunas víctimas, considerando que los recursos concretos ofrecidos por el sistema judicial turco para la justa indemnización moral y material por la pérdida de sus seres queridos eran insatisfactorios, recurrió al Tribunal de Estrasburgo, considerando que la conducta de las autoridades locales había dado lugar a una violación de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y del artículo 1 del Primer Protocolo Adicional.

La demanda fue confirmada en primera instancia por el Tribunal de Primera Instancia y, posteriormente, confirmada por la Gran Sala⁶⁵.

En concreto, los jueces consideraron que las autoridades turcas eran responsables de no haber adoptado con prontitud y de manera adecuada las medidas legislativas, administrativas y de información necesarias para garantizar la seguridad del vertedero⁶⁶ y, en consecuencia, de no haber protegido la vida y los bienes de las personas que residían cerca de él. Desde otro punto de vista, el Tribunal de Justicia recuerda que el alcance de la protección otorgada por el artículo 2 se extiende

⁶⁴ Como en el caso tanto de *Guerra contra Italia* como de *Fadeyeva contra Rusia*, donde el Tribunal ha remitido sistemáticamente las denuncias en principio presentadas en virtud del artículo 2 de la Convención a casos protegidos por el artículo 8, confirmando su orientación para subsumir las denominadas denuncias ambientales dentro de este marco reglamentario.

⁶⁵ Caso *Oneryildiz contra Turquía*, sentencia (Gran Sala) de 30 de noviembre de 2004.

⁶⁶ *Ibidem*: “The positive obligation to take all appropriate steps to safeguard life for the purposes of Article 2 [...] entails above all a primary duty on the State to put in place a legislative and administrative framework designed to provide effective deterrence against threats to the right to life”. Párrafo 101: “The Grand Chamber accordingly agrees with the Chamber (see paragraph 79 of the Chamber judgment) that it was impossible for the administrative and municipal departments responsible for supervising and managing the tip not to have known of the risks inherent in methanogenesis or of the necessary preventive measures, particularly as there were specific regulations on the matter. Furthermore, the Court likewise regards it as established that various authorities were also aware of those risks, at least by 27 May 1991, when they were notified of the report of 7 May 1991. It follows that the Turkish authorities at several levels knew or ought to have known that there was a real and immediate risk to a number of persons living near the Ümraniye municipal rubbish tip. They consequently had a positive obligation under Article 2 of the Convention to take such preventive operational measures as were necessary and sufficient to protect those individuals”. Párrafo 108: “[T]he Government have not shown that any measures were taken in the instant case to provide the inhabitants of the Ümraniye slums with information enabling them to assess the risks they might run as a result of the choices they had made. In any event, the Court considers that in the absence of more practical measures to avoid the risks to the lives of the inhabitants of the Ümraniye slums, even the fact of having respected the right to information would not have been sufficient to absolve the State of its responsibilities”, párrafo 89.

también a los denominados aspectos procedimentales, que requieren la adopción, en los sistemas de cada Estado, de medidas eficaces de investigación y sanción para los responsables del hecho dañoso.⁶⁷ La eficacia de tales medidas precisó el Tribunal, debe evaluarse no sólo teóricamente, sino también en la práctica, teniendo en cuenta la situación específica de que se trate⁶⁸. En el presente caso, si bien la legislación turca contenga suficientes fundamentos jurídicos para cumplir con los requisitos antes mencionados, no han sido puestas en práctica, hasta el punto de que ningún funcionario público ha sido considerado responsable de las muertes causadas por la explosión en el vertedero.

Además, en este caso, también se constató una violación del artículo 13 de la Convención, ya que el subsiguiente proceso civil iniciado por las familias de algunas víctimas, que tenía por objeto obtener una indemnización económica, aunque terminó después de casi cuatro años con el reconocimiento de una indemnización desproporcionada al daño provocado, nunca llegó a ejecutarse, por lo que las acciones judiciales iniciadas resultaron completamente inútiles.⁶⁹

El asunto Oneyirdiz confirma la estrecha relación entre la protección de la salud pública y la protección del medio ambiente y reviste un interés particular, ya que, por primera vez, amplía al artículo 2 una gran parte de las construcciones interpretativas desarrolladas por los jueces de Estrasburgo en relación con el contenido del artículo 8. De hecho, también incluye entre las obligaciones positivas exigidas a las autoridades estatales para la protección satisfactoria impuesta

⁶⁷ *Ibidem*: “To sum up, the judicial system required by Article 2 must make provision for an independent and impartial official investigation procedure that satisfies certain minimum standards as to effectiveness and is capable of ensuring that criminal penalties are applied where lives are lost as a result of a dangerous activity if and to the extent that this is justified by the findings of the investigation [...]. In such cases, the competent authorities must act with exemplary diligence and promptness and must of their own motion initiate investigations capable of, firstly, ascertaining the circumstances in which the incident took place and any shortcomings in the operation of the regulatory system and, secondly, identifying the State officials or authorities involved in whatever capacity in the chain of events in issue”, párrafo 94.

⁶⁸ *Ibidem*: “The national courts should not under any circumstances be prepared to allow life-endangering offences to go unpunished. This is essential for maintaining public confidence and ensuring adherence to the rule of law and for preventing any appearance of tolerance of or collusion in unlawful acts [...]. The Court’s task therefore consists in reviewing whether and to what extent the courts, in reaching their conclusion, may be deemed to have submitted the case to the careful scrutiny required by Article 2 of the Convention, so that the deterrent effect of the judicial system in place and the significance of the role it is required to play in preventing violations of the right to life are not undermined.” párrafo 96: “[I]t cannot be said that the manner in which the Turkish criminal justice system operated in response to the tragedy secured the full accountability of State officials or authorities for their role in it and the effective implementation of provisions of domestic law guaranteeing respect for the right to life, in particular the deterrent function of the criminal law”, párrafo 117.

⁶⁹ *Ibidem*: “[T]he Grand Chamber [...] considers it decisive that the damages awarded to the applicant – solely in respect of the non-pecuniary damage resulting from the loss of his close relatives – have never in fact been paid to him. [...] It has not been explained to the Court’s satisfaction why the award has not been paid. It considers that the applicant cannot be reproached for not having taken personal steps to enforce the award, given the time taken by the administrative court to decide his compensation claim and the fact that the amount awarded for non-pecuniary damage was not even subject to default interest. The timely payment of a final award of compensation for anguish suffered must be considered an essential element of a remedy under Article 13 for a bereaved spouse and parent”, párrafo 152.

por el artículo 2, el deber de adoptar sistemas de información oportuna y clara al público sobre la presencia de una actividad potencialmente capaz de causar daños graves.⁷⁰

3. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El breve repaso de la jurisprudencia propuesta hasta ahora permite hacer algunas reflexiones sobre el camino emprendido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hacia la ampliación de las garantías frente a los fenómenos de degradación ambiental, al igual que sobre la configuración y el contenido del derecho al medio ambiente como derecho fundamental en el sistema del CEDH y en la Unión Europea.

En este sentido, en primer lugar debemos reconocer el indudable mérito del Tribunal de Estrasburgo como primer tribunal internacional que ha establecido la existencia de un vínculo directo entre la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, reconociendo así el impacto negativo y creciente que los episodios de contaminación grave pueden tener en el disfrute de los derechos humanos en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales⁷¹.

La Corte desarrolló entonces una jurisprudencia cada vez más sensible a las necesidades ambientales, a pesar del silencio de la Convención, estableciendo en los casos antes mencionados, y en otros similares, una serie de máximas que han identificado los parámetros de admisibilidad de las denuncias basadas en el daño ambiental, llegando así a delinear los contornos de un derecho humano independiente de un medio ambiente sano.

Por lo tanto, en el sistema paneuropeo de protección multinivel de los derechos fundamentales, ha conseguido esbozar, de manera compatible con los límites inherentes a sus normas procesales y, por lo tanto, no siempre precisa, un sistema de vías de recurso para los hechos que violan

⁷⁰ *Ibidem*: “Where such dangerous activities are concerned, public access to clear and full information is viewed as a basic human right; for example, the above-mentioned Resolution 1087 (1996) makes clear that this right must not be taken to be limited to the risks associated with the use of nuclear energy in the civil sector”; párrafo 62. “[E]mphasis should be placed on the public’s right to information, as established in the case-law of the Convention institutions. The Grand Chamber agrees with the Chamber [...] that this right, which has already been recognized under Article 8 may also, in principle, be relied on for the protection of the right to life, particularly as this interpretation is supported by current developments in European standards” párrafo 90.

⁷¹ SHELTON, D., “The Environmental Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, en *The Global Community. Yearbook of International Law and Jurisprudence*, 2004, p. 301.

los derechos individuales y que muy a menudo no encuentran una justificación adecuada en las legislaciones nacionales, ni en algunos casos dentro de la Unión Europea.

Con el fin de proteger los derechos humanos tradicionales sancionados positivamente en la C.E.D.H., las sentencias del Tribunal de Estrasburgo han llegado a configurar la existencia de un entorno jurídico autónomo, concebido como una síntesis de los factores que permiten y promueven la vida y el desarrollo de los seres vivos, percibiendo claramente la diversidad ontológica de la noción de medio ambiente con respecto a los bienes individuales sujetos a los derechos humanos. Sin embargo, cabe señalar inmediatamente que este proceso sólo puede considerarse plenamente aplicado mediante la inclusión expresa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de un nuevo protocolo adicional que añade el derecho a un medio ambiente sano a la lista de derechos protegidos por él. Si es cierto que la jurisprudencia de la Corte ya ha contribuido a delinear el contenido de ese derecho, destacando sus aspectos sustanciales y procedurales y acudiendo al caso del Tatar para decretar su existencia autónoma, la misma jurisprudencia presenta críticas en orden al marco jurídico en el cual reconducir las violaciones en materia ambiental.⁷²

Se hace referencia a ambigüedades y a límites de la norma identificada repetidamente por el Tribunal como la referencia al reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, es decir, el artículo 8 del Convenio.⁷³

No hay duda de que algunos de los casos de daño ambiental sometidos a la atención del Tribunal de Estrasburgo y decididos sobre la base del artículo 8 del CEDH, podrían ser juzgados también desde el punto de vista de la conformidad con otros artículos de la Convención, en particular el artículo 2 (relativo a la el derecho a la vida), el artículo 6 (derecho a un juicio con las debidas garantías), el artículo 1 del primer Protocolo adicional, artículo 13 (derecho a la tutela judicial efectiva), artículo 10 (sobre la libertad de expresión).

El caso más relevante se refiere al uso alternativo del artículo 2, relativo a la protección del derecho a la vida, que no prevé ningún margen de discrecionalidad entre intereses privados y públicos, ni ninguna posibilidad de obstrucción por parte del Estado, obviamente proporciona una protección más estricta que la que proporciona el artículo 8. En los casos *Guerra contra Italia* y *Tatar contra Rumania*, en que también se había alegado la violación del artículo 2, habida cuenta de la gravedad

⁷² O'CONNELL, R., "Social and Economic Rights in the Strasbourg Convention", en *Rule of Law and Fundamental Rights of Citizens: the American and European Conventions on Human Rights*, London, 2015, p. 78.

⁷³ HAUMONT, F., *Le droit fondamental à la protection de l'environnement dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales*, Dordrecht, 2008, pp. 46-55.

de la infracción y las consecuencias para la integridad física y mental de los demandantes, el Tribunal de Primera Instancia declaró que (Caso Guerra), o excluyó completamente (Caso Tatar), que los casos en examen debía examinarse a la luz de la compatibilidad con el artículo 2, teniendo en cuenta, por otra parte, que se ha producido la infracción *minoris generis* del artículo 8. Las fuertes expresiones de disidencia expresadas por algunos miembros de las salas judiciales⁷⁴ en los casos anteriores refuerzan la tesis de quienes creen que en estos y otros casos en los que los episodios de grave contaminación ambiental conllevan graves riesgos para la vida, la Corte ha preferido remitirse al artículo 8 por la mayor flexibilidad que ofrece la disposición para juzgar la conducta de las autoridades.⁷⁵

De hecho, la tendencia consolidada de dar al artículo 8 una dimensión tanto procesal como sustancial - sancionando así al Estado, como ocurrió en el caso *contra Italia*, por no haber difundido información adecuada a la comunidad sobre los riesgos relacionados con la presencia de actividades industriales particularmente peligrosas - abre el camino a nuevas consideraciones. Italia fue sancionada en virtud del artículo 8 por no proporcionar a la comunidad de Manfredonia, residente cerca de Enichem, información sobre la peligrosidad de la planta que, de haberse conocido, les habría permitido evaluar la oportunidad de no establecer su residencia en esa zona o de trasladarse a otro lugar. Pues bien, siguiendo el mismo razonamiento, ¿cómo puede excluirse que el hecho de no proporcionar la misma información sobre el riesgo extremo de la planta no implique también una violación del derecho a la vida?

Es difícil negar que los episodios de contaminación pueden, por lo menos a medio-largo plazo, implicar riesgos justificados para la salud pública y la vida misma, aunque no necesariamente se traduzcan en una violación del derecho a la vida. Las dificultades e incoherencias inherentes a la referencia al artículo 8 son evidentes, incluso en situaciones en las que puede ser aplicado de manera secundaria en comparación con otras disposiciones de la Convención, específicamente destinadas a proteger el bien jurídico ‘vida’, indudablemente digno de protección prioritaria. Otro punto de crítica a la exégesis del artículo 8 elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se refiere a la indeterminación del llamado umbral de gravedad que deben alcanzar las amenazas ambientales para ser potencialmente perjudiciales para el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Es, de hecho, un criterio de pura elaboración jurisprudencial, no anclado a ningún parámetro previsto positivamente

⁷⁴ Dissenting opinion del Juez Jambrek en el caso *Guerra contra Italia*.

⁷⁵ FALLON, M., *Droit Fondamental à l'Environnement, en L'environnement, objet d'un droit fondamentale*, Leiden, 2008, p. 35.

y, por lo tanto, caracterizado por considerables dudas aplicativas, cuya respuesta se deja sustancialmente a la apreciación discrecional de los jueces.

En última instancia, las consideraciones que se han hecho refuerzan la propuesta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa⁷⁶ de añadir al catálogo de derechos garantizados por la C.E.D.H., con las modalidades que se consideren más adecuadas, el derecho a un medio ambiente sano, como una posición jurídica subjetiva autónoma cuyo contenido, aunque ya suficientemente esbozado por la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, requiere un mayor esfuerzo de ordenación jurídica.

⁷⁶ Resolución No. 1885 “Drafting an Additional Protocol to the European Convention of Human Rights concerning the right to a healthy environment”, Parliamentary Assembly, 2009.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DEL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

1. El Derecho internacional al ambiente tras la creación de las Naciones Unidas

Un paso importante en la evolución del Derecho internacional al medio ambiente fue, sin duda, la creación de las Naciones Unidas y de sus Institutos Especializados, momento histórico a partir del cual comenzó a surgir la oportunidad de una acción concertada a nivel internacional para establecer un enfoque racional de la gestión de los recursos naturales.

Aunque, de hecho, la Carta de San Francisco no contiene ninguna referencia explícita a la protección del medio ambiente, es razonable indicar que los fundamentos de la sistematización de la ciencia jurídica en este campo, especialmente en lo que se refiere a la interconexión entre la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos, se encuentran en la estructura asumida por la comunidad internacional organizada tras los conocidos acontecimientos bélicos y, de hecho, con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas.

No es necesario recordar la importancia histórica de la Carta de las Naciones Unidas en la elaboración de las teorías modernas sobre los derechos humanos “Los pueblos de las Naciones Unidas están decididos[...] a reafirmar su fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana[...]” y “[...]promover el progreso social y un nivel de vida más elevado en el marco de una libertad más amplia”, así como es bien sabido que entre los objetivos indicados en la Carta figura la ‘cooperación internacional para la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario’,⁷⁷ que debe perseguirse precisamente mediante la promoción y el “respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”.⁷⁸ Estos son los principios que han inspirado la inclusión progresiva de las cuestiones ambientales y el desarrollo sostenible entre las tareas de las Naciones

⁷⁷ Artículo 1 punto 3 de la Carta de las UN.

⁷⁸ *Ibidem*.

Unidas, aumentando la conciencia de toda la comunidad internacional respecto de las mismas cuestiones.

Por otra parte, a pesar de que no se ha establecido un Instituto de las Naciones Unidas especializado en la protección del medio ambiente, la protección de los recursos naturales está expresamente consagrada en el instrumento fundador de la FAO.⁷⁹ Además, cabe recordar que, por iniciativa de la UNESCO,⁸⁰ en octubre de 1948 se celebró una conferencia internacional con la participación de los representantes de numerosos gobiernos dedicados a las cuestiones ambientales, que culminó con el nacimiento de la organización internacional que se ocupa de cuestiones ambientales: la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza.⁸¹

El 28 de marzo de 1947, entonces, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), incluyó, de hecho, temas ambientales dentro de la esfera de competencia de las Naciones Unidas a través de la Resolución No. 32, con la cual se reconoció la importancia de los recursos naturales de la Tierra y, con el objetivo de fortalecer su protección mediante el intercambio de información, ideas y experiencias y se convocó la *'United Nations Conference on the Conservation and Utilization of Resources'*.⁸²

La Conferencia se recuerda por ser la primera en mencionar los vínculos entre la conservación de los recursos y el desarrollo del medio ambiente humano, lo que atestigua el inicio de un nuevo enfoque por parte de la comunidad internacional de abordar las cuestiones ambientales: ya no sólo de manera fragmentada y sectorial, sino a través de una visión más amplia e integrada.

En los años siguientes, la atención de la comunidad internacional y la actividad de la Asamblea General de las Naciones Unidas se centraron en la conservación de la flora y de la fauna y, en particular, en los efectos potencialmente desastrosos de los experimentos nucleares y de producción de petróleo sobre el medio ambiente. Esto condujo, por un lado, a la Conferencia sobre la conservación de los seres marinos vivos⁸³ y la siguiente firma del Convenio de Ginebra de 1958 sobre la pesca y la conservación de los seres vivos en alta mar además de la Convención de Londres de 1954 sobre la contaminación del mar por hidrocarburos y el Tratado de Moscú de 1963 por el que se prohíben los ensayos de armas nucleares en la atmósfera, el espacio subacuático y el espacio

⁷⁹ El artículo 1, párrafo 2, letra C del Estatuto de la FAO hace mención entre sus objetivos de la *'Conservation of natural resources and the adoption of the improved methods of agriculture production'*.

⁸⁰ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

⁸¹ International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources.

⁸² La conferencia tuvo lugar en New York (USA) desde el 17 de agosto al 6 septiembre 1949, se presentaron mas de 1000 delegados que representaban casi a 50 Estados.

⁸³ Conference on the Conservation of the Living Resources of the Sea, Genève, 1954.

ultraterrestre, más conocido como *Nuclear Test Ban Treaty*, aunque su aprobación se debió a preocupaciones de carácter más político que ambiental.

Es del 1958 la famosa Conferencia de Ginebra sobre el Derecho del Mar⁸⁴, mientras que el Tratado de Washington de 1959 sancionó la internacionalización de la Antártida,⁸⁵ estableciendo la prohibición de todas las actividades militares en el continente, la prohibición de todo tipo de experimentos nucleares, la cooperación en la investigación científica y la adopción de medidas específicas para la protección de los animales y de las plantas presentes en esta región polar.

El Derecho internacional del medio ambiente ‘moderno’, sin embargo, tiene su origen en los años 60, cuando el fuerte desarrollo económico que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial, combinado con la ocurrencia de desastres ecológicos, como el hundimiento del petrolero Torrey Canyon, de cuyo casco se escapó tal cantidad de crudo que inundó las costas de Francia e Inglaterra, ayudó a concienciar al mundo científico y a la sociedad civil de los efectos secundarios asociados al accidente.

Estos eventos contribuyeron, por lo tanto, a estimular una mayor reflexión de la comunidad internacional sobre la oportunidad de adoptar instrumentos eficaces para la protección de los derechos humanos destinados a proteger el medio ambiente: por lo tanto, no es casualidad que en los últimos años ve una creciente participación directa de las organizaciones internacionales más importantes a nivel mundial y regional. Desde el Consejo nació en 1968, la Declaración para el control de la contaminación atmosférica,⁸⁶ aprobada por el Comité de Ministros de dicha Organización el 8 de marzo de 1968, y la posterior Carta Europea del Agua⁸⁷ adoptada el 6 de mayo del mismo año. En 1968, los mismos países que eran miembros del Consejo de Europa también firmaron lo que se consideró la primera convención regional europea sobre el medio ambiente: el Acuerdo Europeo sobre las restricciones del uso de ciertos detergentes en los productos de lavado y limpieza⁸⁸.

Se puede constatar una voluntad de la comunidad internacional de proteger el medio ambiente para garantizar el bienestar de toda la especie humana y la conciencia de que sólo se pueden lograr resultados significativos mediante una actitud de cooperación entre los Estados.

⁸⁴ Terminó con la adopción de las cuatro convenciones sobre el derecho del mar.

⁸⁵ *The Antarctic Treaty*, Washington DC el 1/12/1959.

⁸⁶ Declaration on Air Pollution Control, 1998.

⁸⁷ Precedido de la Resolución N. 10 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.

⁸⁸ European Agreement on the Restrictions of the Use of Certain Detergents in Washing and Cleaning products, estipulado en Bruselas el 16 de septiembre del 1968.

En particular, la Carta Europea del Agua consagró la necesidad de preservar este elemento y, sin mencionar nunca un derecho específico de cada ser humano a tener acceso al agua, reconoció su papel central - principalmente para permitir la supervivencia de todas las criaturas vivientes - considerándolo como un ‘patrimonio común’.⁸⁹ Además, se estableció expresamente un principio que sólo aparentemente se daba por sentado, a saber, que el agua no conoce fronteras y que, como recurso común su protección requiere necesariamente una actividad de cooperación internacional.⁹⁰ Por otro lado, también en el ‘*European Agreement on the Restrictions of the Use of Certain Detergents in Washing and Cleaning products*’ los Estados partes reconocieron la urgencia de armonizar su legislación en materia de control de las aguas con el fin de adoptar medidas comunes para garantizar ‘la protección de la naturaleza en general’, garantizando, en particular, el suministro de agua para las necesidades de la población, la industria y la agricultura, la urgencia para proteger la flora y la fauna acuáticas, como elementos que contribuyen al bienestar de toda la humanidad.⁹¹

Asimismo, la Convención Africana sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales,⁹² firmada en Argel el 15 de septiembre de 1968 entre los Estados miembros de la entonces Organización de la Unidad Africana, fijó como objetivos el fortalecimiento de la protección del medio ambiente en general; la promoción de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales; y la armonización y coordinación de las políticas de los Estados Miembros en estos ámbitos.⁹³

Además, en la búsqueda de estos resultados, los Estados partes se comprometieron a garantizar a todos los seres humanos el derecho a un medio ambiente favorable a su propio desarrollo, reconociendo su deber de garantizar, tanto individual como colectivamente, el disfrute del derecho a

⁸⁹ Punto X del documento: “*Water is a common heritage, the value of which must be recognized by all*”.

⁹⁰ Punto XII: “*Water knows no frontiers: as a common resource it demands international co- operation. International problems arising from the use of water should be settled by mutual agreement between the States concerned, to conserve the quality and quantity of water*”.

⁹¹ En el preámbulo de este acuerdo se establece: “*Whereas the said governments have striven to encourage progress as far as may be practicable not only in social matters but in the related field of public health, and have undertaken to harmonize their national legislations in pursuance of the action mentioned in the foregoing paragraph; Whereas it is becoming increasingly necessary to secure harmonization of the laws on the control of fresh water pollution; Being convinced that appropriate measures are essential not only from the standpoint of human needs but also to ensure the protection of nature in general, the paramount objectives being to protect effectively: The protection of nature in general, the paramount objectives being to protect effectively: a) the supply of water for the population, for industry, for agriculture and for other business occupations; b) the natural aquatic fauna and flora, and in particular so far as they contribute to human well-being [...]*”.

⁹² Modificada e integrada por la Asamblea de la Organización a Maputo (Mozambique) el 21 de julio del 2003.

⁹³ El artículo 2 de la Convención establece: “*The objectives of this Convention are: 1. to enhance environmental protection; 2. to foster the conservation and sustainable use of natural resources; and 3. to harmonize and coordinate policies in these fields with a view to achieving ecologically rational, economically sound and socially acceptable development policies and programs*”.

un desarrollo armonioso, así como el deber de conjugar de manera justa, equitativa y sostenible los intereses no opuestos al desarrollo económico y la protección del medio ambiente.⁹⁴

Progresivamente, por lo tanto, se estaba formando un corpus de normas ambientales internacionales, alimentado también por una actividad cada vez más intensa de las organizaciones internacionales, al igual que por algunos pronunciamientos jurisprudenciales importantes. Un papel decisivo en el desarrollo del Derecho internacional del medio ambiente -y, sobre todo, del principio de prohibición de la contaminación transfronteriza- debe atribuirse, en particular, a la decisión de la Comisión Mixta de Arbitraje de los Estados Unidos/Canadá en el litigio ‘*Trail Smelter*’,⁹⁵ de 11 de marzo de 1941, en el que los miembros de dicha Comisión alegaron que:

“de conformidad con los principios del Derecho internacional, ningún Estado tiene derecho a utilizar o permitir el uso de su territorio de manera que cause un perjuicio al territorio de otro Estado o a las personas y bienes situados en él...”.⁹⁶

Un principio de derecho, cuyo carácter consuetudinario se afirma hoy en día con amplio consenso, fue afirmado por la Corte Internacional de Justicia en la controversia sobre el Canal de Corfú de 9 de abril de 1949,⁹⁷ el primer caso tratado por la Corte, en el que los magistrados de La Haya, aunque dentro de un asunto que no se refería a la causa en materia de medio ambiente, consideró que era “una obligación internacional de todo Estado no permitir conscientemente la utilización de su territorio con el fin de realizar actos contrarios a los derechos de otros Estados” principio que se especifica a continuación, tanto en la decisión del Tribunal Arbitral como en la resolución del conflicto surgido entre Francia y España sobre la utilización de las aguas del lago

⁹⁴ *Ibidem* artículo 3: “In taking action to achieve the objectives of this Convention and implement its provisions, the Parties shall be guided by the following: 1. the right of all peoples to a satisfactory environment favorable to their development; 2. the duty of States, individually and collectively to ensure the enjoyment of the right to development; 3. the duty of States to ensure that developmental and environmental needs are met in a sustainable, fair and equitable manner”.

⁹⁵ Véase el caso *Trail Smelter*, sentencia de la Comisión Mixta de Arbitraje Estados Unidos-Canadá, 1941, en United Nations Reports of International Arbitral Awards (UNRIAA), página 1965 y siguientes. El se refería a los daños causados en los Estados Unidos por los humos emitidos por la fundición de Columbia Británica, situada en Trail, Canadá, a sólo siete kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. El alcance de los daños, que duraron más de dos décadas, llevó a una investigación por parte de la Comisión Internacional EEUU-Canadá establecida bajo el Tratado de Aguas Límites de 1909; esta organización aplicó una penalización a los daños causados en Canadá hasta la fecha de emisión de la sanción (enero de 1932), instando, además, al propietario de la fundición a mejorar sus instalaciones para reducir significativamente las emisiones nocivas. Sin embargo, también debido al carácter genérico de estas prescripciones, los episodios de contaminación continuaron, hasta el punto de que los Estados celebraron un acuerdo por el que sometieron la solución de la controversia a una junta de arbitraje compuesta por tres árbitros asistidos por dos científicos nombrados cada uno por uno de los dos Estados.

⁹⁶ “Under the principles of international law [...] no state has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein, when the cause is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence”.

⁹⁷ Caso *the Corfu Channel*, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania, 1949.

Lanoux. A pesar de los progresos mencionados anteriormente, hubo una falta de estrategia ambiental internacional coherente hasta finales del decenio de 1960. De hecho, el Derecho internacional del medio ambiente seguía estando compuesto por un conjunto desarticulado de normas sectoriales, esencialmente sin mecanismos de sanción y/o aplicación y en ausencia de instituciones mundiales de alguna manera responsables de su aplicación coordinación.

Es dentro del marco histórico delineado que empezó el proceso que conducirá a la convocación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1968 y, posteriormente, celebrada en Estocolmo en julio de 1972.

Son muchas las razones por las que esta Conferencia reviste especial importancia, tanto por el impulso dado a la creación de instituciones específicas para la cooperación internacional en materia de medio ambiente, como por la elaboración de nuevas normas para la protección del medio ambiente mundial. En particular, en lo que se refiere a este último aspecto, hasta la Conferencia de Estocolmo no había ningún texto que pudiera dar lugar a la teorización de derechos ambientales específicos y, menos a la atribución de una dimensión ambiental al grupo, incluso reciente, de derechos humanos.

La falta de una referencia explícita al medio ambiente no permitió, de hecho, plantear la hipótesis de su inclusión entre los derechos fundamentales a los que se refiere el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, ni para considerar que el concepto de progreso social que en él se menciona también debería combinarse con el adjetivo ‘sostenible’. A este respecto, se pueden encontrar otras ideas en la Declaración Universal de Derechos Humanos,⁹⁸ adoptada -como es sabido- por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 10 de diciembre de 1948, y, posteriormente, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966), en cuyo texto se reconoce a toda persona el derecho “a una mejora constante de sus condiciones de existencia” (art. 11) y “gozar del más alto nivel posible de salud física y mental” (art. 12), subrayando, además, que la plena aplicación de este derecho requiere también la adopción de medidas adecuadas para garantizar “la mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial”.⁹⁹

⁹⁸ Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 25: “1) *Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control [...]*”.

⁹⁹ Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales “1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. 2. The steps to be taken by the States Parties to the present*

Sin embargo, a pesar de su valor reconocido y de su importancia histórica en el desarrollo de dos derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la vida y el derecho a la salud, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni los dos Pactos de la ONU contienen una referencia orgánica al medio ambiente, limitándose -al igual que las anteriores convenciones internacionales sobre el medio ambiente- a unos pocos indicios aislados, que todavía no captan plenamente y no desarrollan el vínculo, más tarde demostrado ser inseparable, entre la protección del medio ambiente, el derecho a la salud y el derecho a la vida.

De hecho, será necesario esperar varios años desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas antes de que uno de sus órganos preste la debida atención a la cuestión ambiental y a la relación entre el hombre y la naturaleza. Esto sucedió, una vez más, gracias al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), que, con la resolución No. E 1346 (XLV) del 30 de julio de 1968,¹⁰⁰ recomendó a la Asamblea General promover una Conferencia que abordara los “problemas del medio ambiente humano” destinados a “intensificar medidas a nivel nacional e internacional para detener o, al menos, limitar el deterioro progresivo del medio ambiente natural a fin de protegerlo y mejorarlo en interés del hombre”.¹⁰¹ Sin embargo, lo que distinguió la resolución del Consejo Económico y Social fue el reconocimiento, por primera vez, de la oportunidad de abordar los problemas del medio ambiente humano de manera sistemática, dentro de un marco unificado dentro del sistema de las Naciones Unidas, con la conciencia de que ciertas cuestiones individuales sólo pueden resolverse mediante la cooperación internacional y la concertación de acuerdos.¹⁰² El ECOSOC, por lo tanto, mientras que por un lado reconocía la importancia de las contribuciones hechas sobre aspectos específicos del medio ambiente humano por varios gobiernos, incluyendo organizaciones no gubernamentales además de organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas Unidas, por otra parte, subrayaba la importancia de ponerlos en perspectiva y dirección. El Comité de las Regiones apoya el desarrollo de un enfoque común, identificando la principal organización

Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for: a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child; b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene; c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases; d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness”.

¹⁰⁰ E1346 (XLV): “*Question of convening an international conference on the problems of human environment*”: “*The Economic and Social Council, convinced of the urgent need for intensified action at the national and the international level, in order to limit and, where possible, to eliminate the impairment of the human environment and in order to protect and improve the natural surroundings in the interest of man*”.

¹⁰¹ *Ibidem*: “*The Economic and Social Council [...] Proposes to the General Assembly that include in the agenda of its twenty-third session an item entitled ‘The problems of human environment’*”.

¹⁰² *Ibidem*: “*Believing it desirable to provide a framework for a comprehensive consideration within the United Nations of the problems of human environment in order to focus the attention of Governments and public opinion on the impotence of this question and also to identify those aspects of it that can only, or best, be solved through international co-operation and agreement*”.

internacional como el foro más adecuado para sensibilizar a los gobiernos individuales y al público en general sobre la importancia de esta cuestión. Siguiendo las instrucciones del Consejo Económico y Social, el 3 de diciembre de 1968, durante el vigésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Resolución No. 2398 (XXIII) - titulada '*Problems of the Human Environment*'. Cabe señalar que esta recomendación ha subrayado la existencia de un vínculo directo entre el deterioro de la calidad del medio ambiente y el deterioro de la condición humana, haciendo referencia explícita al riesgo de que se ponga en peligro el disfrute de los derechos humanos fundamentales.¹⁰³ En la siguiente Resolución No. 2581 (XXIV), titulada '*United Nations Conference on Human Environment*', la Asamblea General aceptó la invitación de Suecia para celebrar la Conferencia en Estocolmo en junio de 1972 y, teniendo en cuenta también las indicaciones recibidas de informes específicos del Secretario General y del Consejo Económico y Social, declaró expresamente que el objetivo principal de la Conferencia era "proporcionar directrices para la acción de los gobiernos y de las organizaciones internacionales responsables de la protección y mejora del medio ambiente humano", subrayando una vez más la importancia de la cooperación internacional. Con este fin, se instituyó un Comité Preparatorio, compuesto por representantes de unos veintiocho países (entre los cuales varios considerados 'en vías de desarrollo'), encargado de apoyar al Secretario General en la organización de la Conferencia y de coordinar la considerable contribución de la documentación recibida de los gobiernos, organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. La Conferencia de Estocolmo también fue precedida por varias reuniones preparatorias de expertos y representantes gubernamentales, además de otras tres resoluciones de la Asamblea General.¹⁰⁴ Particularmente importante es la Resolución No. 2849 el 20 de diciembre de 1971 en la que el Comité la Asamblea de las Naciones Unidas recordó una vez más a la comunidad internacional reforzar la cooperación en el ámbito de la protección del medio ambiente y de la utilización racional y equilibrada de los recursos naturales, haciendo hincapié, sin embargo, en que la manera de proteger el medio ambiente debe ir de la mano con la promoción de políticas de desarrollo económico y social.

¹⁰³ *Ibidem*: "The General Assembly, noting that the relationship between man and his environment is undergoing profound changes in the wake of modern scientific and technological developments, [...] [4] Noting, in particular, the continuing and accelerating impairment of the quality of the human environment caused by such factors as air and water pollution erosion and other form of soil deterioration, waste, noise and the secondary effects os biocides, which are accentuated by rapidly increasing population and accellerating urbanization [...] [5] Concerned about the consequent effects on the condition of man, his physical, mental and social well-being, his dignity and his enjoyment of basic human rights, in developing as well as developed countries [...]".

¹⁰⁴ Resolución No. 2657 del 7/12/1970, Resolución No. 2849 y 2850 del 20/12/1971.

2. Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano hasta el Informe Brundtland

La labor iniciada con la Recomendación del Consejo Económico y Social concluyó el 5 de junio de 1972, día en que se inauguró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. La toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la alteración del medio ambiente por parte de los representantes de los Estados y del público en general ha contribuido a que la Conferencia de Estocolmo sea no sólo un punto de referencia en el desarrollo del Derecho internacional sobre el medio ambiente, sino también el primer acontecimiento mundial importante para tratar la cuestión. En diez días, más de seis mil personas se reunieron en Estocolmo, entre ellas delegaciones del más alto nivel de unos 133 Estados, representantes de numerosas organizaciones internacionales, más de 700 observadores de organizaciones no gubernamentales, así como 1500 periodistas.

La Conferencia concluyó con la adopción de algunos instrumentos no vinculantes pero de especial importancia científica e histórica, entre los que destacan: un Plan de Acción, compuesto por 109 recomendaciones, y una Declaración de Principios sobre el Medio Ambiente Humano; además, sobre la base de los trabajos de la Conferencia, la Asamblea General de la ONU adoptó poco después, en diciembre de 1972, una resolución que contenía propuestas sobre cuestiones institucionales y financieras destinadas a la cooperación internacional en la gestión del medio ambiente.

Concretamente, el Plan de Acción consistía en un programa mundial de evaluación del medio ambiente (*Earthwatch*), que se aplicaría mediante un sistema mundial de vigilancia del medio ambiente (*Global Environmental Monitoring System*, GEMS) y un sistema de intercambio de información (*International Referral System*, INFOTERRA), con el fin de definir las directrices para promover la utilización equilibrada de los recursos naturales a nivel internacional y elaborar medidas de apoyo a actividades como la educación, la formación profesional, la información y la cooperación técnica y financiera.

En cambio, en la Resolución subsiguiente se instituyó el UNEP¹⁰⁵ (*United Nations Environment Programme*), que expresa la ‘voz para el medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas’ y es el principal órgano institucional al que se le atribuye la tutela del medio ambiente y el

¹⁰⁵ La resolución No. 2997 prevé la institución de varios organismos: el Governing Council for Environmental Programmes, para dirigir y coordinar los programas ambientales, el Environment Fund, para su financiación y el Environment Secretariat, con funciones de coordinación y consultoría.

uso sostenible de los recursos naturales. La Declaración sobre el Medio Ambiente Humano está compuesta por 26 ‘principios’ sobre los derechos y las responsabilidades del hombre en relación con el medio ambiente, que siguen siendo considerados hoy en día como directrices fundamentales para la protección y mejora del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

La Declaración de Estocolmo tiene muchos méritos: en primer lugar, reconoció que las políticas de desarrollo sin algún tipo de control conducirían a daños ambientales irreparables, tales como para poner en peligro la subsistencia de la humanidad,¹⁰⁶ pero también ha subrayado la necesidad de que la comunidad internacional preserve y mejore el medio ambiente en el interés de las generaciones presentes y futuras.¹⁰⁷

El último grupo de Principios - y en particular los que van desde 21 al 26 - también contiene parámetros de conducta de considerable importancia para el desarrollo del derecho ambiental internacional y, de hecho, actualmente se acepta ampliamente que algunos de ellos corresponden a normas internacionales consuetudinarias. En particular, se reconoce como norma de derecho consuetudinario la norma contenida en el Principio 21¹⁰⁸, según la cual los Estados no deben utilizar su territorio de tal manera que dañe el medio ambiente de otros Estados o de zonas que no estén bajo la jurisdicción de ningún Estado.

En el párrafo 1 del Preámbulo de la Declaración se afirma que *“el hombre es a la vez criatura y creador de su medio ambiente, asegurando su subsistencia física y ofreciéndole la posibilidad de un desarrollo intelectual, moral, social y espiritual... Los dos elementos de su ambiente, el elemento natural y el creado por él, son esenciales para su bienestar y para el pleno disfrute de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.”* Y de nuevo, en el segundo párrafo se afirma que: *“La protección y mejora del medio ambiente es una cuestión de importancia primordial para el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero; responde al deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y es un deber de todos los gobiernos.”*

La importancia de un medio ambiente sano como requisito previo para el pleno disfrute de los derechos humanos fundamentales ha sido reconocida desde el principio. Sin embargo, si en el Preámbulo el medio ambiente se considera meramente instrumental para la realización de los

¹⁰⁶ Punto 6 del Preámbulo de la Declaración.

¹⁰⁷ Punto 7 del Preámbulo de la Declaración.

¹⁰⁸ *Ibidem*: Principio 21 “In accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, States have the sovereign right to exploit their resources pursuant to their environmental policies, and have the duty to ensure that activities conducted within the limits of their jurisdiction or under their control do not cause damage to the environment of other States or of regions which are not subject to any national jurisdiction”.

derechos fundamentales (y en primer lugar el derecho a la vida), el siguiente Principio 1 de la Declaración de Estocolmo va más allá, llegando a la hipótesis de la existencia de un derecho individual específico a vivir en un medio ambiente sano y, de hecho, incluye este principio entre los derechos humanos fundamentales. La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano y, en general, la Conferencia que dio origen a la misma, asume, por lo tanto, un papel decisivo en la elaboración y en el desarrollo tanto del Derecho internacional del medio ambiente como de los estudios que han teorizado progresivamente la existencia del derecho al medio ambiente como derecho humano fundamental. También representó el punto de partida en la construcción de un sistema institucional de *governance* ambiental y fue la primera oportunidad de diálogo directo y global, al más alto nivel representativo, en el que se abordaron las complejas cuestiones relacionadas con el medio ambiente y sus repercusiones tanto en las relaciones entre los Estados como para toda la humanidad.

Por lo tanto, no es casualidad que en los años posteriores a la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano se multiplicara el número de tratados internacionales bilaterales y multilaterales relativos al medio ambiente.

Entre ellos, la ‘Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter’, del 1972; la International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, firmado en Londres en 1973; Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, firmado en la 17ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en París en 1972. La labor de la Conferencia de Estocolmo también dio un impulso fundamental a la puesta en marcha de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuyas negociaciones, iniciadas en Nueva York en 1973, desembocaron en 1982 en la conocida Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que entró en vigor el 16 de noviembre de 1994. Pero, como se mencionó anteriormente, la Declaración de Estocolmo fue también el primer instrumento internacional que estableció un vínculo entre la protección de los derechos humanos y el medio ambiente; y también en este aspecto, la brecha abierta en 1972 por la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano se ha ido ampliando progresivamente, hasta ser objeto de un examen cada vez más detallado en un número considerable de principios y tratados, de carácter global y regional, además de diversas sentencias de tribunales nacionales e internacionales, que han contribuido a perfilar esta interrelación, distinguiendo una dimensión sustancial de una dimensión procesal.

En particular, con respecto a los instrumentos internacionales que, después de la Conferencia de Estocolmo, han contribuido al desarrollo de una reflexión sobre las formas en que se logra la funcionalidad recíproca entre la protección de la naturaleza y los derechos humanos, recordamos, en

primer lugar, la *World Charter for Nature*,¹⁰⁹ aprobada por la Asamblea General de la O.N.U. Este documento, aunque no vinculante, contiene algunos pasajes de particular interés porque, además de repetir y reiterar principios ya formulados en la anterior Declaración sobre el Medio Ambiente Humano, introducen una nueva perspectiva a través de la cual analizar esta relación: la de reconocer a los individuos la titularidad de derechos procesales específicos (derecho a la información, participación y acceso a medios de reparación), instrumentales para la protección del medio ambiente.

El Principio 23 de la Carta Mundial de la Naturaleza, establece, en particular, que *“All persons, in accordance with their national legislation, shall have the opportunity to participate, individually or with others, in the formulation of decisions of direct concern to their environment, and shall have access to means of redress when their environment has suffered damage or degradation”*¹¹⁰

El Principio 21 también establece el deber de la cooperación entre los Estados, pero también entre las organizaciones internacionales y las personas - con el fin de llevar a cabo acciones comunes para proteger la naturaleza, mencionando expresamente el intercambio de información y las consultas con este fin.¹¹¹

El informe ‘*Brundtland*’, elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, y nombrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (con la Resolución 38/161) de 19 de diciembre de 1983 propone “una estrategia medioambiental a largo plazo para lograr un desarrollo sostenible para el año 2000 y años posteriores.”¹¹² El Informe Brundtland, dirigido a todos los gobiernos del planeta, a las organizaciones internacionales y a los ciudadanos, ha supuesto un paso más en la concepción de la gestión de los problemas relacionados con la degradación del medio ambiente, representando, en concreto, un documento de importancia fundamental en la elaboración del principio de desarrollo sostenible, es decir, un modelo de desarrollo “*capaz de satisfacer las necesidades de la generación actual, sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas.*”¹¹³ Y el Principio 1 del ‘Anexo 1’ del Informe Brundtland, que contiene

¹⁰⁹ Resolución No. 37/7 “World Charter for Nature”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1982.

¹¹⁰ Carta Mundial de la Naturaleza: Principio 23: “*Todas las personas deben tener la oportunidad de participar, individual o colectivamente, a la formulación de decisiones que puedan afectar a su medio ambiente, y deben tener acceso a medios de reparación si se ha degradado o dañado de otro modo.*”

¹¹¹ *Ibidem*: Principio 21 “*States and, to the extent they are able, other public authorities, international organizations, individuals, groups and corporations shall: (a) Co-operate in the task of conserving nature through common activities and other relevant actions, including information exchange and consultations.*”

¹¹² Resolución No. 38/161 “Informe Brundtland, Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo”, párrafo 8a

¹¹³ “*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs.*”

una lista de ‘principios legales para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible’,¹¹⁴ establece como principio fundamental que “*All human beings have the fundamental right to an environment adequate for their health and well being*”. Además, el Principio 6 del mismo documento impone a los Estados la obligación general de proporcionar información con el fin de permitir que todas las personas con un interés significativo tengan acceso a los procedimientos administrativos o judiciales y a la revisión de la decisión en su contra.¹¹⁵

Si bien los principios jurídicos que figuran en el anexo del Informe Brundtland son poco más que sugerencias formuladas por una comisión de expertos jurídicos a la comunidad internacional, no debe subestimarse la referencia al derecho sustantivo de un medio ambiente sano y a los derechos de participación que en él se contienen, especialmente en vista de la considerable repercusión que el informe ha tenido en el plano planetario, también debido a los riesgos que en él se temen para la humanidad. La Asamblea General estuvo muy abierta a las peticiones de la Comisión y ya durante el 43º período de sesiones, en diciembre de 1988, en virtud de la resolución 43/196, encomendó al Secretario General, asistido por el Director Ejecutivo del PNUMA, que procediera a la organización de la Conferencia y transmitiera sus consideraciones, por conducto del Consejo Económico y Social, a la Asamblea en el siguiente período de sesiones. Por consiguiente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) se convocó el 22 de diciembre de 1989 con la aprobación de la Resolución 44/228.

En el mismo período, la creciente sensibilidad por las cuestiones ambientales a todos los niveles, indudablemente alentada por las acciones promovidas por las principales instituciones internacionales -a su vez también como consecuencia de los catastróficos acontecimientos ocurridos alrededor de mediados de los años ochenta (incluidos los famosos desastres de Bhopal, Seveso y Chernobyl)- condujo a la inclusión de consideraciones de esta naturaleza en las convenciones no directamente relacionadas con el medio ambiente, sino, precisamente, en los tratados de protección de los derechos humanos.

A este respecto, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos¹¹⁶ - aprobada en 1981 bajo los pronósticos de la Organización para la Unidad Africana (OUA), es el primer

¹¹⁴ “*Summary of Proposed Legal Principles for Environmental Protection and Sustainable Development Adopted by the WCED Experts Group on Environmental Law*”.

¹¹⁵ “*States shall inform in a timely manner all persons likely to be significantly affected by a planned activity and to grant them equal access and due process in administrative and judicial proceedings*”.

¹¹⁶ “*Banjul Charter of Human Rights and People’s Rights*”, adoptada el 27 de junio 1981 y fecha de entrada en vigor el 21 de octubre 1986.

instrumento internacional vinculante de derechos humanos que ha incluido expresamente el derecho a un medio ambiente sano entre sus principios fundamentales.

El artículo 24 del Convenio reconoce el “derecho de los pueblos a disfrutar de un medio ambiente satisfactorio que propicie el desarrollo”. A partir de entonces, el artículo 11 del subsiguiente Protocolo Adicional de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1988, dio un nuevo impulso al reconocimiento del llamado derecho humano al medio ambiente, afirmando que *“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”*.

Además, algunas disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos -que no contienen disposiciones expresamente destinadas a proteger el medio ambiente- también han sido interpretadas por el órgano jurisdiccional establecido teniendo en cuenta consideraciones relativas a la protección del medio ambiente.

Más recientemente, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea¹¹⁷ se ha mencionado la necesidad de garantizar una protección eficaz del medio ambiente. Sobre la base de estas experiencias, la necesidad de preservar el medio ambiente también se incluyó en los tratados para la protección de los derechos de determinadas categorías sociales.

Un ejemplo es el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,¹¹⁸ en virtud del cual *“los Estados reconocen el derecho del niño a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a beneficiarse de los servicios médicos y de rehabilitación [...] se esfuerzan por garantizar la plena aplicación de dicho derecho y adoptan todas las medidas apropiadas para: [...] c) combatir las enfermedades y la malnutrición [...] teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente natural.”* El escenario del artículo 24 del mencionado Convenio

¹¹⁷ Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: artículo 37: *“Un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de la calidad del medio ambiente deben integrarse en las políticas de la Unión y garantizarse de conformidad con el principio de desarrollo sostenible”*.

¹¹⁸ Convención sobre los derechos del niño: artículo 24: *“States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived water, taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution; [...] e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access to education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents” of his or her right of access to such health care services. 2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate measures: [...] c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care, through inter alia, the application of readily available technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking.*

reviste especial importancia porque destaca otro aspecto de la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, a saber, la utilización del primero para la protección del derecho humano a la salud, retomando así un concepto también contenido en la Carta Europea del Medio Ambiente y la Salud,¹¹⁹ documento aplicado por los ministros del medio ambiente y salud de los Estados europeos de la O.M.S. (Organización Mundial Salud). De manera similar, al artículo 29 los Estados Partes acuerdan que la educación del niño debe tener también por objeto “*desarrollar el respeto por el medio ambiente natural en los niños.*”

La Convención I.L.O.¹²⁰ sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, contiene importantes referencias a la protección del medio ambiente y al derecho de los pueblos indígenas a elegir su propio modelo de desarrollo y estar informados y participar en los procesos de toma de decisiones nacionales y regionales. También se requiere que los gobiernos, en cooperación con las poblaciones afectadas, tomen todas las medidas apropiadas para la conservación del medio ambiente y de los territorios en los que residen.¹²¹

3. La Declaración de Río de Janeiro y el *World Summit on Sustainable Development*¹²² de Johannesburg

Celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro,¹²³ que tuvo una enorme repercusión mediática,¹²⁴ se convocó con el fin de elaborar estrategias compartidas internacionalmente para luchar contra la degradación ambiental y promover modelos de desarrollo sostenibles y compatibles con el medio ambiente en todos los países y dio lugar a la aprobación de tres instrumentos no vinculantes, a saber, un plan de acción conocido como Programa 21 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

¹¹⁹ Carta Europea del Medio Ambiente y la Salud: punto 1: “*Every individual is entitled to an environment conducive to the highest attainable level of health and wellbeing; information and consultation on the state of the environment, and on plans, decisions and activities likely to affect both the environment and health; participation in the decision-making process Every individual is entitled to information and consultation on the state of the environment*”.

¹²⁰ International Labour Organization.

¹²¹ La Convención I.L.O. sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes: artículo 7, párrafo 4: “*Governments shall take measures, in co-operation with the peoples concerned, to protect and preserve the environment of the territories they inhabit*”.

¹²² ‘Cumbre de la Tierra de Johannesburgo’.

¹²³ *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), Río de Janeiro (Brasil) dedse el 3 hasta el 4 de junio de 1992.

¹²⁴ Asistieron 172 Estados representados al más alto nivel (108 Estados representados por Jefes de Estado o de Gobierno), así como delegados de las principales organizaciones internacionales, representantes de las aproximadamente 1400 organizaciones no gubernamentales acreditadas y unos 9 000 periodistas de todo el mundo.

En particular, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sigue siendo uno de los documentos más importantes en el proceso de desarrollo del Derecho internacional del medio ambiente: esto especialmente en vista de la identificación de los derechos ambientales de naturaleza procesal, positivados en el Principio 10 de este documento y que, posteriormente, se incluirán progresivamente en numerosos convenios internacionales sobre el medio ambiente.

A pesar de su redacción jurídicamente débil, el Principio 10 -que retoma los temas contenidos en la anterior Carta Mundial de la Naturaleza- subraya la importancia del acceso a la información sobre el medio ambiente y una participación adecuada de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, acentuando que debe garantizarse el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y/o administrativos.¹²⁵

En este sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es recordada no tanto por la fuerza formal de los instrumentos a los que dio vida, sino probablemente por haber esbozado un marco a través del cual abordar con urgencia los problemas del medio ambiente mundial, denunciados en detalle por estudios e informes de numerosos expertos internacionales.

De hecho, en los años posteriores a esa Conferencia se crearon numerosas convenciones internacionales sobre el medio ambiente, algunas de las cuales, como ya se ha dicho, se abrieron a la firma durante sus trabajos. En particular, se aprobaron el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, posteriormente, el Protocolo de Kioto de la misma Conferencia, además del Convenio de Rotterdam '*on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*', con el fin de reglamentar las modalidades de importación y exportación de plaguicidas tóxicos y productos químicos peligrosos, reduciendo así los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

El llamado 'Informe Ksentini', presentado a la Comisión de Derechos Humanos con la Resolución 1995/14, concluye afirmando claramente que los derechos ambientales son parte integrante de los derechos humanos existentes. En opinión del ponente Ksentini, el gran número de

¹²⁵ Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: principio 10: "*Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided*".

instrumentos adoptadas desde la Declaración de Estocolmo de 1972, que subrayaba el vínculo intrínseco entre la protección de la naturaleza, el desarrollo, la democracia y la promoción de los derechos humanos, constituyen los fundamentos jurídicos para teorizar la existencia de los derechos medioambientales -tanto sustantivos como procesales- y son indicativos de su aceptación universal.¹²⁶ Por lo tanto, el informe destaca la dimensión medioambiental de una extensa lista de derechos fundamentales,¹²⁷ enfatizando, en particular, cómo su disfrute puede verse afectado concretamente por un medio ambiente degradado y, a la inversa, cómo la violación de los derechos humanos puede perjudicar la protección del medio ambiente. En la perspectiva indicada por Ksentini, por lo tanto, el medio ambiente sano se considera, por una parte, como una situación jurídica subjetiva reconocida internacionalmente y, por otra, como una condición previa para la realización efectiva de muchos otros derechos humanos, principalmente el derecho a la salud. A pesar de la riqueza de los puntos de reflexión y del valor propositivo, el Informe Ksentini fue ampliamente criticado por su enfoque demasiado antropocéntrico.¹²⁸

A pesar del fracaso sustancial del intento de codificación realizado por el Relator Ksentini, en los años posteriores a la Conferencia de Río, la interconexión entre los derechos humanos y el medio ambiente fue retomada a nivel internacional y regional por muchos otros instrumentos, de diferente valor jurídico, tanto en el ámbito del Derecho internacional del medio ambiente¹²⁹ como en el ámbito de los derechos humanos. Es significativo que los pueblos de las Naciones Unidas hayan indicado entre los objetivos del próximo milenio el de liberar a la humanidad del peligro de ver agotados los recursos naturales del planeta a través de la responsabilidad humana y, en última instancia, el de garantizar un medio ambiente adecuado para la continuación de la experiencia terrenal de la humanidad. Al invocar un ‘derecho al desarrollo’, es evidente que el desarrollo al que alude sólo puede ser *environmentally sustainable* y, por lo tanto, necesariamente, también saludable.

En el Plan de Acción de la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en la capital sudafricana del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, como una

¹²⁶ Informe Ksentini: “*The research has revealed universal acceptance of the environmental rights recognized at the national, regional and international level*”.

¹²⁷ *Ibidem*: Párrafo n. 243: “[...] *Many human rights are suited to being applied from an ecological perspective, whether those rights are political, civil, social, economic or cultural, and whether they are exercised individually or collectively*”.

¹²⁸ HANDL, G., “Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly “Revisionist” View” en. CANCELEDO TRINIDADE, A.A., *Human Rights, Sustainable Development And The Environment*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica-Brasilia, 1992, p. 135.

¹²⁹ Un ejemplo es la “*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*”.

continuación ideal -diez años después- de la labor realizada en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro.

También en esta ocasión, los representantes de más de 190 Estados reafirmaron su compromiso de alcanzar los objetivos establecidos en la Declaración de Río y la plena aplicación de los principios contenidos en el Programa 21. Por lo tanto, se esbozaron estrategias integradas para fortalecer el desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y ecológico, tanto en el ámbito nacional como en el regional e internacional y, al mismo tiempo, se establecieron líneas de intervención multilaterales destinadas a hacer frente a las emergencias ambientales en prácticamente todos los sectores.¹³⁰

Al igual que los instrumentos (no vinculantes) desarrollados en las cumbres de Estocolmo y Río de Janeiro, el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo hace referencia explícita al vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente, afirmando en el párrafo 169 que los Estados “*reconocen las consideraciones hechas con respecto a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo*”. En el párrafo 128,¹³¹ que recuerda expresamente el Principio 10 de la Declaración de Río, se recomienda a los Estados que garanticen el acceso a la información y la participación del público en la adopción de decisiones sobre el medio ambiente, para garantizar el acceso a los procedimientos de revisión judicial y/o administrativa de las decisiones relacionadas con el medio ambiente.

Los tres ‘pilares’ consagrados en el Principio son 10 de la Declaración de Río se han incorporado en varios convenios internacionales en el ámbito de la protección del medio ambiente: entre ellas figuran, además de las ya mencionadas Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental y, sobre todo, lo que se ha definido como “*the most ambitious venture in the area of environmental democracy so far undertaken under the auspices of the United Nations*”, es decir, la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.¹³²

¹³⁰ DEL VECCHIO, A., *Il Diritto Internazionale dell’ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, Studi e Documenti di Diritto Internazionale e Comunitario, Napoli, 2005, p. 312.

¹³¹ “*Ensure access, at the national level, to environmental information and judicial and administrative proceedings in environmental matters, as well as public participation in decision-making, so as to further principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development, taking into full account principles 5, 7 and 11 of the Declaration*”

¹³² Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters.

Por último, pero no por ello menos importante, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su misión el estudio de la relación entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente, con especial atención a los efectos del cambio climático en los derechos humanos, y en el proceso de *global warming*.¹³³

¹³³ Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights A/HRC/10/61, 15/01/2009.

CONCLUSIONES

Primera. La protección del medio ambiente es ahora una necesidad prioritaria para toda la humanidad, compartida por la generalidad de los Estados de la comunidad internacional que, conscientes de la insuficiencia de las respuestas unilaterales o fragmentarias a los problemas de carácter mundial, han ido ampliando y fortaleciendo progresivamente la red de reglamentaciones convencionales pertinentes. Desde este punto de vista, el desafío ambiental universal es una expresión de los procesos evolutivos en curso relativos a la estructura misma del orden internacional, que está adquiriendo una dimensión mundial, en cuya definición los nuevos actores del Derecho internacional participan de manera cada vez más original e incisiva.

En esta investigación, la identificación de una norma general de Derecho internacional que establece una obligación jurídica erga omnes de proteger el bien jurídico ‘medio ambiente’ -entendido en un sentido unitario, como equilibrio ecológico global y patrimonio común de la humanidad- ha sentado las bases para cuestionar la configuración y existencia de un derecho individual al medio ambiente de matriz internacional.

Segunda. En el plano europeo, el análisis de los procesos normativos y jurisprudenciales pertinentes permite esbozar con razonable certeza el surgimiento de un nuevo derecho humano al medio ambiente que actúa como límite a la soberanía de los Estados para disponer libremente de sus recursos naturales, en interés de las generaciones presentes y futuras para disfrutar de un medio ambiente sano. En este proceso de reconstrucción se ha prestado especial atención a la evolución de la legislación de la UE, que ha culminado con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que, como es bien sabido, ha generado un vínculo orgánico entre las disposiciones de la UE sobre la protección de los derechos humanos y los reglamentos de la UE. De hecho, con la adhesión a la C.E.D.H. se han sentado las bases para crear un verdadero espacio constitucional europeo caracterizado por la plena integración entre el sistema de la UE y el sistema convencional, lo que permite vislumbrar la institucionalización de relaciones directas y formales entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con la aceptación de la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, la UE será objeto de un control externo por parte de dicho órgano jurisdiccional, al igual que sus Estados miembros, con el fin de formalizar el vínculo entre ambos órganos jurisdiccionales, tal como pidió el anterior presidente del Tribunal, Rodríguez Iglesias, en su intervención en la ceremonia de apertura del Año Judicial del Tribunal de Estrasburgo 2002:

“Nuestras dos Cortes comparten un compromiso existencial con los valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de Europa, en el que se basan la democracia y los derechos fundamentales, y contribuyen así, junto con las jurisdicciones supremas y constitucionales nacionales, al surgimiento de lo que se ha definido como un espacio constitucional europeo”.

Tercera. Es necesario subrayar la importancia de las disposiciones horizontales contenidas en los artículos 52 (en particular en el apartado 3 de dicho artículo) y 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tienen por objeto garantizar la coherencia de los dos instrumentos legislativos en lo que se refiere a los derechos reconocidos en ambos. En tales casos, de conformidad con el apartado 3 del artículo 52 y con las aclaraciones interpretativas del presidente que redactó la Carta, cuando los derechos previstos en la Carta corresponden a derechos también garantizados por la comunidad europea, su significado y alcance son idénticos a los previstos en la Convención, teniendo en cuenta no sólo la redacción de las disposiciones que los establecen, sino también la forma en que han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Estrasburgo.

Por lo tanto, las mismas consideraciones sobre los perfiles sistemáticos del derecho al medio ambiente en la C.E.D.H. permiten afirmar su existencia también en la U.E. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ajustan perfectamente a las disposiciones de los Convenios de los que la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo ha deducido progresivamente la existencia del derecho al medio ambiente.

En particular, el artículo 8 del CEDH corresponde exactamente al artículo 7 de la Carta. Del mismo modo, el artículo 47 de la Directiva establece el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, norma que coincide con las disposiciones de los artículos 6 (derecho a un juicio justo) y 13 (derecho a un recurso efectivo) de la UE; son precisamente estas disposiciones las que la jurisprudencia convencional ha utilizado para modular los aspectos procesales y la protección del derecho al medio ambiente en el sistema de la UE.

Cuarta. Teniendo en cuenta también la voluntad del legislador europeo de dotar a la UE de un catálogo de derechos fundamentales que se inscriba en un plan de protección no inferior al garantizado por la C.E.D.H., no carece de fundamento considerar que el derecho a un medio ambiente sano, cuyo reconocimiento en el sistema de la C.E.D.H. es jurisprudencia del Tribunal de Justicia, figura igualmente entre los derechos sancionados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Esta conclusión permite también concretar la disposición del artículo 37 de la Carta, titulada “Protección del medio ambiente”, según la cual:

“Un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de la calidad del medio ambiente deberán integrarse en las políticas de la Unión y garantizarse de conformidad con el principio de desarrollo sostenible”.

De no ser así, no se explicaría, entre otras cosas, la inclusión de esta disposición en un instrumento destinado institucionalmente a enumerar los propios derechos fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

Quinta. El análisis de esta legislación también ha permitido identificar los perfiles mínimos sustanciales de este derecho en los conocidos principios contenidos en el actual artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (T.F.U.), que - según la interpretación de los tribunales de la UE. - asumen un papel central en torno al cual medir la legitimidad de la legislación de la Unión. En cuanto a los aspectos procedimentales y de protección del derecho al medio ambiente, están, por otra parte, cuidadosamente esbozados en diversas directivas e, incluso antes, en los tres pilares de la Convención de la U.N.E.C.E. sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (la llamada Convención de Aarhus), ratificada de forma independiente y sin reservas con respecto a sus Estados miembros por la entonces Comunidad Europea, cuyas disposiciones contribuyen, de manera decisiva, a la configuración de este derecho en el sistema jurídico de la Unión. Sin embargo, el estudio del llamado tercer pilar de la Convención de Aarhus, relativo al acceso a la justicia, ha sacado a la luz algunas críticas importantes de los reglamentos de la UE, que inevitablemente se traducen en un límite para el pleno ejercicio del derecho fundamental a un medio ambiente sano. La lectura particularmente restrictiva que, de manera casi constante, han dado los tribunales de la UE respecto a los requisitos de acceso individual a la justicia con arreglo al antiguo artículo 230, apartado 4, del Tratado CE constituía un obstáculo para que las asociaciones activas en el ámbito de la protección del medio ambiente emprendieran acciones legales para garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental.

Sexta. El acceso directo a la justicia de la Unión implica también una limitación del aspecto procesal del derecho a un medio ambiente sano, que se pone de manifiesto mediante pruebas privadas de la posibilidad de una protección adecuada, y no puede pasarse por alto la importancia de una acción de protección eficaz y rápida frente a daños medioambientales para los que una intervención tardía puede resultar completamente inútil. Del mismo modo, cada vez es más difícil negar el conflicto entre

el actual sistema de acceso directo a la justicia de la Unión para las personas físicas y jurídicas, en comparación con las obligaciones convencionales asumidas por la entonces Comunidad con la ratificación del Convenio de Aarhus. Si bien los dos primeros pilares de la Convención (el acceso a la información y la participación del público en la toma de decisiones) se han transpuesto en detalle al Derecho de la UE mediante dos Directivas específicas, las disposiciones convencionales sobre el acceso a la justicia todavía no han sido objeto de la legislación de la UE, como demuestra claramente la correspondiente propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Por lo tanto, son precisamente las disposiciones sobre el acceso a la justicia las que muestran los mayores retrasos e incertidumbres por parte de la Unión en la plena aplicación de la Convención de Aarhus.

Séptima. Se puede considerar que los Tribunales de la UE deben superar el actual enfoque hermenéutico para eliminar las situaciones críticas antes mencionadas que impiden el pleno despliegue de algunos de los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, como el artículo 7 (dada -se repite- su correspondencia con el artículo 8 del CEDH, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), el artículo 47 (derecho a un recurso efectivo y a un juicio justo) y, sobre todo, el artículo 37, una disposición que se refiere al derecho al medio ambiente.

El diálogo encontrado entre los tribunales internos, los Tribunales de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es, sin embargo, indicativo de un sistema integrado de protección judicial y comparación de la ley que se discute y que, incluso más allá de la fuerza formal de las respectivas sentencias, determina un condicionamiento mutuo y la consecuente limitación de las áreas de soberanía tanto de los Estados como de otros sujetos de derecho global.

Octava. Este sistema multinivel de ‘*enforcement*’ integrado para proteger el derecho al medio ambiente en uno con las garantías de carácter informativo y participativo, permite, finalmente, llegar a una conclusión en línea con el principio inherente al brocardo *ubi remedium ibi ius*, según el cual un derecho existe siempre y cuando el bien, o el interés objeto de éste, está protegido por instrumentos de protección adecuados. Lo mismo debe decirse, de hecho, con respecto al derecho individual al medio ambiente, como una posición jurídica subjetiva independiente dentro de los derechos fundamentales de la Unión Europea y del sistema del CEDH, así como, indirectamente, las posiciones jurídicas garantizadas por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Es oportuno recordar que la inclusión de la protección del medio ambiente en la casi totalidad de las disposiciones de rango primario de los Estados que se adhieren a la Unión Europea se ha traducido en términos concretos en las disposiciones constitucionales internas, de un

derecho individual específico a beneficiarse de un medio ambiente sano, o en normas primarias que delegan esta tarea en los propios Estados, los cuales están obligados a adoptar medidas detalladas adecuadas para dar contenido a las disposiciones constitucionales pertinentes. Por lo tanto, no cabe duda de que el derecho al medio ambiente como instrumento para proteger el bien jurídico medioambiental está constantemente previsto a nivel interno.

BIBLIOGRAFÍA

- BENEVISTE, E., *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, vol. II, Einaudi, Torino, 1976.
- BOBBIO, N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.
- BORDALI SALAMANCA, A., "El derecho fundamental a vivir en un medio ambiente adecuado ¿a quién protege?, ¿a quienes protege?", *Gaceta Jurídica*, Santiago de Chile, 1999.
- BOYLE, A., *Los derechos ambientales y el Derecho internacional*, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2003.
- CARMONA, L.M.D.C., *Derechos humanos y medio ambiente*, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2001.
- CONFORTI, B., *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.
- DE SALVIA, M. y ZAGREBELSKY, V., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, Giuffrè, Roma, 2008.
- DE STEFANO, P., *Il Diritto Internazionale dei diritti umani*, Editoriale Scientifica, Padova, 2012.
- DEL VECCHIO, A., *Il Diritto Internazionale dell'ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, Studi e Documenti di Diritto Internazionale e Comunitario, Napoli, 2005.
- DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, J., *The Protection of Fundamental Rights in the EU: Community of Values with Opt-Out?, Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution?*, Nomos, Sofia, 2008.
- FALLON, M., *Droit Fondamental à l'Environnement, en L'environnement, objet d'un droit fondamentale*, Leiden, 2008.
- FELIZIANI, C., "Il diritto all'ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU in materia di rifiuti", *en Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, Roma, 2012.
- FERRARA, R., "La tutela ambientale tra diritto comunitario e diritto interno", *en Diritto e gestione dell'ambiente*, Roma, 2001.
- FRANCIONI, F., "Access to Justice in International Environmental Law", *en AA.VV., The Protection and Sustainable Development of the Mediterranean-Black Sea Ecosystem*, Bruselas, 2008.
- FRANCIONI, F., "Il diritto di accesso alla giustizia nel diritto internazionale generale", *en AA.VV. L'accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione Europea*, Milano, 2009.
- GALISONGA, A., "European Court of Human Rights, Introductory Note", *en The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence*, vol. 2, New York, 2009.
- GARCÍA SAN JOSÉ, D., *Environmental protection and the European Convention on Human Rights*, Council of Europe Publishing, Estrasburgo, 2005.

- GOODMAN, A. R., "Toward an Institutional Theory of Sovereignty", *Stanford Law Review*, Vol. 55, Stanford, 1987.
- HANDL, G., "Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly "Revisionist" View en. *CANCADO TRINIDADE, A.A., Human Rights, Sustainable Development And The Environment*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica-Brasilia, 1992.
- HAUMONT, F., *Le droit fondamental à la protection de l'environnement dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales*, Dordrecht, 2008.
- KANT, I., *Per la pace perpetua*, trad. de R. Bordiga, Feltrinelli Editore, Milano, 2004.
- MAZZOLA, M.A., *I nuovi danni (Danno ambientale individuale - Danno al paesaggio - Danni da inquinamento elettromagnetico - Danni da fumo - Danni da OGM - Illecito di Stato - Danno da bullismo - Danno da stalking)*, Cedam, Milano, 2008.
- MARCHISIO, S., "Gli atti di Rio nel Diritto Internazionale", en *Rivista di Diritto Internazionale*, vol. 3, 1992.
- MONTI, L., "I diritti umani ambientali nella convenzione di Aarhus", en ROZO ACUÑA, E., *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg: saggi di diritto internazionale pubblico comparato, penale ed amministrativo*, Torino, 2004.
- PANAYOTOU, T., *Ecología, medio ambiente y desarrollo. Debate, crecimiento versus conservación*, Ediciones Gernika SA, Ciudad de México, 1994.
- PEDERSEN, O. W., "European Environmental Human Rights and Environmental Rights: A Long Time Coming?", en *The Georgetown International Environmental Law Review*, Londres, 2009.
- PÉREZ LUÑO, A.E., *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Sevilla, 2010.
- PÉREZ LUÑO, A.E., *Las generaciones de derechos humanos*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2014.
- PÉREZ LUÑO, A.E., *Los derechos humanos: significación, estatuto jurídico y sistema*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979.
- PORRÚA, M.A., *Recursos naturales y desarrollo sustentable: reflexiones en torno a su problemática*, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Ciudad de México, 2004.
- POSNER, E. A., *The Limits of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2005.
- O'CONNELL, R., "Social and Economic Rights in the Strasbourg Convention", en *Rule of Law and Fundamental Rights of Citizens: the American and European Conventions on Human Rights*, London, 2015.
- QUADRI DE LA TORRE, G., "Políticas Públicas. Sustentabilidad y medio ambiente", *H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura*, Ciudad de México, 2006.
- REITZE, JR. A.W., "Environmental Policy – It is time for a New Beginning", *Columbia Journal of Environmental Law*, Columbia, 1989.
- RODAS MONSALVE, J.C., *Protección Penal y Medio Ambiente*, PPU - Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1994.

- ROSSI, L.S., “How Fundamental is a Fundamental Principle? Primacy and Fundamental Rights after the Lisbon Treaty”, *Yearbook of European Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008.
- SHELTON, D., “The Environmental Jurisprudence of the European Court of Human Rights, 2003-2004”; en *The Global Community. Yearbook of International Law and Jurisprudence*, 2004.
- SQUELLA NARDUCCI, A., *Introducción al derecho*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2000.
- VILLEY, M., *Le droit et les droits de l'homme*, Presses Universitaires De France - PUF, Paris, 2014.
- WATES J., “The Aarhus Convention: a New Instrument Promoting Democracy”, en *Sustainable Justice: Reconciling Economic, Social and Environmental Law*, Leiden, 2005.
- ZAGREBELSKY, V., “La prevista adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, artículo publicado online en *Europenrights.eu*, 2015.
- ZICCARDI CAPALDO, G., “Nazioni Unite ed evoluzione dell’ordinamento internazionale”, en *Democratizzazione all'est e Diritto Internazionale, Atti del Convegno di Studi*, Università di Salerno, Napoli, 1997.
- www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm.

Normativa internacional y otros instrumentos utilizados

- Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 1945.
- Estatuto FAO, Quebec, 1945.
- Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
- Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 1950.
- The Antarctic Treaty, Washington DC, 1959.
- Resolución No. 10 “Declaration of Policy on Water Pollution Control in Europe”, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 1965.
- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966.
- Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
- European Agreement on the Restrictions of the Use of Certain Detergents in Washing and Cleaning products, Bruselas, 1968.
- Convención Americana de Derechos Humanos, 1969.
- Resolución No. 2657, “United Nation Conference on the Human Environment”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1970.
- Resolución No. 2849, “Environment and Development”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1971.
- Resolución No. 2850, “United Nation Conference on the Human Environment”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1971.

- Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 1972.
- Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares y otros Fines Hostiles, 1977.
- Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Viena, 1980.
- Banjul Charter of Human and Peoples Rights, Nairobi, 1981.
- Resolución No. 37/7 “World Charter for Nature”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1982.
- World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1987.
- Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus, 1988.
- Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992.
- Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daño Derivado de Contaminación por Hidrocarburos, 1992.
- Declaración de Rio de Janeiro, 1992.
- United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro, 1992.
- Resolución No. 1995/14 “Review of Further Developments in Fields with Which the Sub-Commission Has Been: Human Rights and Environment”, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 1994.
- Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, 1997.
- Declaration on Air Pollution Control, 1998.
- Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Estocolmo, 2001.
- Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, Johannesburgo, 2002.
- Convención ILO, Ginebra, 2006.
- Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship between Climate Change and Human Rights A/HRC/10/61, 2009.
- Resolución No. 1885 “Drafting an Additional Protocol to the European Convention of Human Rights concerning the Right to a Healthy Environment”, Parliamentary Assembly, 2009.
- Convención Africana sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, Gland, 2012.

Jurisprudencia

- Caso *Trail Smelter*, Comisión Arbitral Mixta USA- Canadá, 1941.
- Caso *the Corfu Channel*, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania, 1949.

- Caso *Taylor contra Reino Unido*, Application n. 5856/72, Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 25/04/1978.
- Caso *Arrondelle contra Reino Unido*, Application n. 7889/77, Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 15/07/1980.
- Caso *Tauira y otros contra Francia*, Application n. 28204/95, Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos 4/12/1995.
- Caso *Guerra contra Italia*, Application n. 14967/89, Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 19/02/1998.
- Caso *Hautala contra Consejo de la Unión Europea*, C-353/99, Decisión del Tribunal de Justicia 6/12/2001.
- Caso *Fadeyeva contra Rusia*, Application n. 55723/00 2005, Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 9/06/2005.

